



Facultad
de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Licenciatura en Ciencia Política

Identidades políticas de origen piquetero: Análisis de los casos del “Movimiento Evita” y la “Corriente Clasista y Combativa” (2019-2023)

Autora:

María del Pilar Fregona

pilarfregona@gmail.com

Director:

Esteban Iglesias

Octubre 2023

Resumen

Esta tesina tiene como propósito caracterizar la construcción de identidades políticas que se inscriben en el heterogéneo campo piquetero. Los casos seleccionados son “Movimiento Evita” y “Corriente Clasista y Combativa”, durante el periodo 2019-2023. Se trata de dos organizaciones sociales que hunden sus raíces en la década de los noventa y principios de los años dos mil, en el contexto de nacimiento y ascenso del movimiento piquetero. Para la consecución del objetivo general, el actual trabajo se nutre de algunos de los aportes proporcionados por los dos principales enfoques en el campo de estudios sobre acción colectiva: el de la movilización de recursos y el de los nuevos movimientos sociales. Asimismo, toma como punto de partida el concepto de “identidad colectiva” de Alberto Melucci, producido al calor de los hallazgos provenientes de la perspectiva de los nuevos movimientos sociales. De este modo, a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo, observaremos en un nivel empírico la interacción entre dos dimensiones teóricas: la dimensión identitaria –priorizada en el enfoque de movimientos sociales- y la dimensión política –priorizada en el enfoque de movilización de recursos-, y su incidencia en los procesos de constitución y desarrollo de dos identidades políticas particulares.

Palabras claves

Identidad política - Piqueteros - Estado - Trabajador desocupado - Trabajador de la economía popular

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I	10
1. Marco teórico-metodológico	10
1.1 Marco teórico-conceptual	10
1.1.1 Movilización de recursos.....	11
1.1.2 Nuevos movimientos sociales	17
1.2 Recapitulación del marco teórico.....	24
1.3 Aspectos metodológicos.....	25
CAPÍTULO II	27
1. Nueva identidad piquetera: origen común, devenires distintos. Breve contextualización.....	27
2. Identidad piquetera, mamushka de identidades	31
2.1 De dónde venimos y quiénes somos	31
2.1.1 Movimiento Evita.....	32
2.1.2 Corriente Clasista y Combativa	35
2.2 Qué (o a quién) enfrentamos.....	38
2.2.1 Movimiento Evita.....	39
2.2.2 Corriente Clasista y Combativa (CCC).....	41
2.3 Hacia dónde vamos.....	45
2.3.1 Movimiento Evita: hacia una economía popular	46
2.3.2 Corriente Clasista y Combativa (CCC): hacia la unidad de la clase obrera	48
3. Trabajadores: entre los desocupados y los de la economía popular.....	49
CAPÍTULO III	52
1. Política social: desbordando sus límites.....	52
1.1 Movimiento Evita: despegar de la política social, aterrizar en la política laboral	53
1.2 Corriente Clasista y Combativa: política social, asistencialismo a cuentagotas	55
1.3 Ni planeros, ni subsidiados, ni piqueteros.....	57
2. Organizaciones sociales en el gobierno: en los márgenes, del lado de adentro.....	58
2.1 Movimiento Evita	60
2.2 Corriente Clasista y Combativa	65
2.3 Recapitulación del apartado	69
CONSIDERACIONES FINALES	73
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	78

A mis papás y mi familia, por la incondicionalidad

A mi director, Esteban, por su cálido acompañamiento en este proceso de creación

A mis amigas y amigos en Santa Fe y Rosario, por su amor y amistad

“Nos falta esta última fuerza. Nos falta un pueblo”

Gilles Deleuze

INTRODUCCIÓN

La irrupción del fenómeno piquetero en la Argentina de finales del siglo XX significó un punto de inflexión en las formas de organización de los sectores populares, así como una renovación de los estudios en el campo de la acción colectiva.

La movilización de los desocupados -que a las luces del presente parece algo dado naturalmente- constituía hasta hace algunas décadas un hecho anómalo para la sociología y la ciencia política. Como señala Torre (2019) la situación de privación material y de exclusión del mercado laboral de los desocupados podía decantar en atomización y en la adopción de estrategias individuales de supervivencia. Sabemos, sin embargo, que el final de la década noventa fue también comienzo; una nueva identidad política, la identidad piquetera, nacida de las fisuras del sistema, vio la luz y ocupó el centro de la escena social y política nacional de aquellos años.

En un contexto de altos niveles de desocupación y subocupación, y de una importante fragmentación de la fuerza laboral que comprendía tanto a los asalariados formales como a grandes franjas de asalariados informales y de desocupados desplazados del mercado laboral, la organización política de las clases trabajadoras asumió formas novedosas, dando lugar al surgimiento de esta nueva identidad política.

Por arriba de las estrategias de supervivencia individuales, por debajo del mercado y del Estado, en paralelo a redes clientelares de los aparatos políticos, y al calor de la sociabilidad tejida en distintos barrios de la Argentina, nacieron y crecieron organizaciones abocadas a la construcción de lazos territoriales, en sus comienzos con fuerte epicentro en el conurbano bonaerense. A las transformaciones producidas en el nivel social, económico y político por la dinámica global del capitalismo en su fase neoliberal y por la implementación de las reformas del consenso de Washington en el contexto nacional, le sobrevino una interesante respuesta territorial alimentada de la robusta tradición organizativa de nuestro país.

En un contexto de importante retracción del trabajo asalariado bien pago y de reestructuraciones productivas y laborales generales, distintas organizaciones sociales ganaron en influencia y en visibilidad, y muchas de ellas persisten en la actualidad. Nos referimos a organizaciones sociales provenientes de corrientes político-ideológicas diferentes y con trayectorias políticas disímiles pero que han intentado representar, a lo largo del tiempo, a un sector social similar. En los albores del movimiento piquetero, se trató de un sector mayormente integrado por trabajadores que habían perdido sus empleos por cierres de fábricas y recortes en la mano de obra. Actualmente, como expresa un dirigente social, “el movimiento piquetero se conforma de trabajadores expulsados del sistema. Hoy, en realidad, tenemos una segunda o tercera generación de chicos que no conocen el trabajo formal”.

De esta manera, el “movimiento piquetero” fue adquiriendo con el paso del tiempo un perfil social más delimitado. En efecto, una gran parte de quienes engrosan las filas de estas organizaciones son “sectores de la población en situaciones de pobreza estructural, que viven en barrios con infraestructura fuertemente deficitaria, con empleos precarios e informales, actividades por cuenta propia de baja calificación y subsidios públicos, sin acceso a las redes de protección social asociadas a la condición asalariada”. (Torre; 2019; 194).

Podemos decir que pese a las distintas transformaciones sucedidas desde los inicios del movimiento piquetero a nuestro presente, algunas organizaciones sociales de origen piquetero han logrado conservar y consolidar su presencia en la arena social y política y, actualmente, representan a importantes sectores sociales excluidos o deficientemente integrados al mercado de trabajo y a la economía formal. Tal como expresa Iglesias (2012; 150), “la persistencia en el tiempo – rutinización– constituye un punto central de las identidades políticas, provocando, tarde o temprano, reubicaciones y/o modificaciones en sus principios constitutivos”.

En este marco, el objetivo general del presente trabajo consiste en caracterizar la construcción de identidades políticas que se inscriben en el heterogéneo campo piquetero. Así, los casos seleccionados son “Movimiento Evita” y “Corriente Clasista y Combativa (CCC)”, y la delimitación temporal será el periodo

2019-2023. Se trata de dos organizaciones sociales que hunden sus raíces en la década de los noventa y principios de los años dos mil, en el contexto de nacimiento y ascenso del movimiento piquetero, y que provienen de corrientes político-ideológicas distintas, elemento que se torna decisivo para explorar en las diferencias entre una y otra y que incide en su manera de accionar colectivamente. ambas organizaciones se encuentran -en mayor o en menor medida- integradas a la coalición de gobierno del Frente de Todos y en el mismo bloque parlamentario en la Cámara de Diputados. Esto hace que sus posicionamientos en torno al Estado y a la política social constituyan dimensiones importantes para pensar su proceso de construcción identitaria.

El periodo seleccionado responde a una necesidad de comprensión, y se justifica en el hecho de que su posicionamiento crítico pero alineado al gobierno de turno permite explorar con mayor riqueza analítica las diferencias que existen en el proceso de construcción identitaria de cada organización.

Debido a lo expuesto anteriormente y en pos de la consecución del objetivo general, los objetivos específicos consistirán en: 1. Caracterizar el proceso de identificación de las organizaciones, a partir de los principios propuestos por Melucci (1999) de solidaridad, conflicto y ruptura de los límites en que ocurre la acción; 2. Reconstruir la concepción de las organizaciones respecto a la política social y 3. Reconstruir el posicionamiento de estas organizaciones ante el gobierno del Frente de Todos.

Este estudio sobre la construcción y desarrollo de identidades políticas se inscribe en el marco de la literatura sobre acción colectiva, y se nutre de los principales enfoques sobre acción colectiva: el de la movilización de recursos y el de los nuevos movimientos sociales.

Nuestro punto de partida teórico-conceptual es el concepto de identidad colectiva planteado por Alberto Melucci, el cual se erige como dimensión central en el análisis de los movimientos sociales. De acuerdo al autor (1999), la identidad colectiva es la capacidad del actor de definirse a sí mismo y a su ambiente, y la premisa sobre la cual el actor es capaz de elaborar expectativas y evaluar las posibilidades y límites de su acción. Lo que nos interesa rescatar aquí es que la

identidad se concibe como proceso de construcción social por parte de los individuos o grupos que forman parte de un movimiento social, sujeta permanentemente a procesos de redefinición y en constante transformación, dando como resultado una definición que, por su dinamismo, resulta valiosa para nuestro trabajo. Es así que el movimiento de desocupados dentro del cual se forjó la “identidad piquetera” a finales del siglo XX, fue alojando en su seno a lo largo del tiempo distintas identidades políticas, algunas de las cuales analizaremos aquí.

CAPÍTULO I

1. Marco teórico-metodológico

1.1 Marco teórico-conceptual

El actual trabajo se inscribe en el campo de estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva. Retomando a Iglesias (2015; 144), “la problemática de la acción colectiva se interroga sobre los diversos modos en que se organizan políticamente diferentes categorías sociales actuantes en la sociedad civil”. Es en este marco que estudiaré algunas de las dimensiones más importantes que intervienen en la determinación de identidades políticas particulares.

Para la consecución del objetivo general, retomaré algunos de los aportes teórico-conceptuales provenientes de los enfoques de la **movilización de recursos** y de los **nuevos movimientos sociales**. Ambos enfoques surgieron hacia mediados de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, en la búsqueda de superar los enfoques provenientes de los dos paradigmas teóricos más importantes: el marxista y el funcionalista. En un contexto de diversificación de los actores que protestaban y de proliferación de nuevas demandas, se trataba de producir perspectivas que dieran cuenta de las nuevas dinámicas que comenzaba a asumir la acción colectiva en esas décadas y de la emergencia de nuevos movimientos sociales, difícilmente equiparables a los movimientos de masas o al movimiento obrero con pretensiones de cambio revolucionario.

Ambas perspectivas teóricas fueron retomadas en la literatura sociológica y politológica para abordar la emergencia, constitución y desarrollo de una identidad política particular, la identidad piquetera. De acuerdo a Iglesias (2015), en las interpretaciones del movimiento piquetero se juega una cuestión significativa en la problemática de la acción colectiva que es la del complejo campo de interacciones entre la dimensión identitaria y la dimensión política de los actores que protestan. Por eso, en el desarrollo de este trabajo se procurará una elaboración conceptual que equilibre el análisis de la dimensión política e identitaria de la acción colectiva.

Resulta conveniente, entonces, brindar un pantallazo de los aportes más importantes de cada enfoque, los cuales se pondrán en perspectiva con el prolífico campo de estudios desarrollado en las últimas décadas en la Argentina en torno al movimiento piquetero.

1.1.1 Movilización de recursos

El contexto de emergencia de la teoría de la movilización de recursos es la crítica a los planteamientos funcionalistas clásicos, debido a su incapacidad para explicar los movimientos sociales que veían la luz en los años sesenta y setenta. En un intento por superar las definiciones basadas en los comportamientos desviados de la acción colectiva, se incorporaron elementos de la teoría de la elección racional poniendo en el centro del análisis al individuo y su capacidad para calcular los costos y beneficios de su participación.

Desde los años setenta y hasta la actualidad, investigadores norteamericanos y europeos han conformado tres grandes enfoques en la teoría de la movilización de recursos, que representan tres grandes abordajes a la hora de analizar el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales (Garza Talavera; 2011). El acento en uno u otro aspecto es lo que señala las diferencias entre los enfoques resumidos a continuación:

1. La estructura de oportunidades políticas y las constricciones que tienen que afrontar los movimientos sociales.
2. Las formas de organización (tanto formales como informales) a disposición de los contestatarios.
3. Los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción.

Interesa especialmente el primer enfoque, del que Sydney Tarrow y Charles Tilly forman parte, y que pone el foco en el estado de las condiciones políticas al momento en que la acción colectiva cobra forma, así como el modo en que esta asume, y el cuándo.

En esta corriente, el accionar contencioso constituye un elemento crucial del momento político, y constituye también la base de todo movimiento social. Dicho

accionar se emplaza en un contexto político determinado, por lo que cobra centralidad el concepto de “estructura de oportunidades políticas”. Dentro del campo de análisis de las oportunidades políticas destaca Sidney Tarrow, para quien “Las explosiones de acción colectiva no pueden atribuirse al nivel de necesidad de la gente ni a la desorganización de sus sociedades. Estas condiciones previas son más constantes que los movimientos que supuestamente generan. Lo que varía ampliamente en el tiempo y el lugar serán las oportunidades políticas, mientras que los movimientos sociales estarán más íntimamente relacionados con los incentivos que éstas ofrecen para la acción colectiva que con las estructuras sociales o económicas subyacentes”. (Tarrow; 1997;148). Aquí se visualiza la importancia atribuida a las oportunidades políticas en tanto circunstancias específicas que, percibidas por los agentes sociales como coyunturas favorables, permiten el despliegue de los recursos necesarios para que la acción colectiva tome forma y para que nuevos movimientos sociales emerjan.

La estructura de las oportunidades políticas como concepto que define el medio ambiente político e institucional en el que se sitúa la acción colectiva comprende las siguientes dimensiones: la apertura del acceso a la participación de nuevos actores, las alineaciones y re-alineaciones políticas en el seno del gobierno, la existencia de aliados influyentes, las divisiones en las elites políticas y la voluntad y capacidad de la que goza un Estado o no para reprimir la disidencia.

Retomando la centralidad que asume el accionar colectivo contencioso en la tradición de la movilización de recursos, debemos sumar dos categorías de gran relevancia: la de los repertorios de acción y la de los ciclos de protesta. Los repertorios de acción política refieren a “un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas, a través de un proceso de elección relativamente deliberado” (Tilly; 2002; 31). Son las formas y medios que adquiere el accionar contencioso de los actores, que se encuentran estrechamente relacionados con el contexto en el que se desarrollan, además de que guardan una perspectiva del pasado, de la tradición histórica y de valores. Con este concepto, Tilly logra captar la evolución de los distintos modos que asume la acción colectiva en el largo plazo.

Respecto al ciclo de protesta, este refiere a “una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades” (Tarrow; 1997; 263). Según Tilly (2002), es en los ciclos de protesta donde la gente aprende la manera de accionar colectivamente, de modo que los actores de un lugar y un momento determinado desarrollan una cantidad limitada de formas de acción organizadas en repertorios. Precisamente, las manifestaciones son el contexto en el cual se han articulado prácticas tradicionales con un conjunto de formas nuevas de acción, lo que puede dar forma a un repertorio caracterizado por otras maneras de representar la protesta, siempre en el marco de unos repertorios anclados culturalmente. Es decir, las experiencias de movilización se constituyen en el espacio en el que se rehacen nuevas prácticas políticas (Sandoval; 2020).

El último enfoque en llegar a la teoría de la movilización de recursos es el de los procesos colectivos de interpretación, referidos como “procesos enmarcadores” o “marcos interpretativos”. La propuesta de estudiar los marcos estratégicos dentro de los cuales la acción colectiva ve la luz responde a la necesidad de suplir algunas vacancias analíticas del enfoque de la oportunidad política, y al interés por comprender y explicar cómo en una cierta coyuntura se construye una interpretación, un marco de referencia que logra movilizar utilizando símbolos y valores culturales.

De acuerdo a McAdam, McCarthy y Zald (1999; 27), quienes retoman la definición de Snow (1988), el término de proceso enmarcador refiere a “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva”.

Según estos autores, el proceso enmarcador es el elemento que media entre oportunidad, organización y acción; refiere a los significados compartidos y

conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación. (McAdam, McCarthy y Zald; 1999)

Dime cómo protestas y te diré quién eres

En algunas de las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas que abordan el fenómeno piquetero, se observa una gran influencia de los conceptos medulares del enfoque de la movilización de recursos.

Es el caso de autores que encuentran en la noción de protesta social un potencial explicativo que da cuenta de las formas que adquiere la acción colectiva desplegada por distintos actores sociales a finales de los noventa del siglo pasado y principios de este siglo. De acuerdo a Schuster (2005; 56), “la noción de protesta social se refiere a los acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda -en general con referencia directa o indirecta al Estado-”. Para este autor, la noción de movimiento social resulta demasiado rígida para la variedad creciente de acciones colectivas que el presente exhibe, ya que para hablar de un movimiento social es necesario detectar una continuidad en un conjunto relativamente homogéneo de acciones colectivas (Schuster; 2005). Siguiendo a Schuster (2005), el nombre “piqueteros” no derivó de su condición social de desempleados o de sus demandas sino de la acción misma. En definitiva, se trató de una categoría social que devino en identidad política a partir de la acción de protesta.

Por otra parte, cabe destacar que a lo largo del periodo 1989-2001 se transforman también las modalidades de acción colectiva predominantes, algo que algunos autores tematizan como el “nuevo repertorio de acción de los movimientos sociales argentinos”. (Merklen; 2005, Auyero; 2002, Farinetti; 2000). Estos estudios dan cuenta de las experiencias de piquetes, asambleas barriales, movimientos de ahorristas y cacerolazos, etc. en uno de los periodos más convulsionados de la historia de nuestro país, en tanto formas de movilización y protesta novedosas respecto a las formas tradicionales. Es en ese contexto que Merklen (2005) distingue al interior del nuevo repertorio cuatro tipos de acciones diferentes: los asentamientos, los piquetes, los estallidos y los saqueos.

Acción colectiva y acción estatal

Podemos encontrar distintas investigaciones en torno al movimiento piquetero que se inscriben en la tradición de la movilización de recursos, especialmente dentro del enfoque de las oportunidades políticas.

Es el caso de aquellos estudios que refieren a la importancia de algunas dimensiones del sistema político, como su grado de apertura, la implementación de iniciativas estatales específicas, entre otras, que se convierten en un factor determinante para la emergencia de la acción colectiva.

En esta tesitura, Iglesias (2015) retoma los estudios de Auyero (2002), quien analiza la incidencia que tuvieron las disputas que se dieron hacia dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en la movilización de recursos sucedida durante la pueblada. También destaca el trabajo de Farinetti (1999), quien analiza las transformaciones que experimentó el repertorio de protesta en Argentina y aporta distintas dimensiones vinculadas al sistema político, el Partido Justicialista, los alineamientos políticos, entre otras, para pensar el concepto de oportunidades políticas.

En esta línea, se encuentran también los autores Pereyra, Pérez y Schuster (2008; 20), para quienes “Hay cuatro elementos principales que deben ser analizados para caracterizar el proceso que atravesaron las organizaciones piqueteras entre la crisis de 2001 y la actualidad. El primer elemento se vincula con la protesta; el segundo, con la política social; el tercero, con las elecciones y el cuarto, con el posicionamiento en términos de oficialismo y oposición”.

También interesa destacar las investigaciones de Gómez (2009), en relación a la importancia que detentan la estructura institucional, el régimen político y las políticas públicas en la creación de oportunidades para la organización autónoma y la acción colectiva contestataria. De acuerdo al autor, el conflicto social puede abordarse desde el “(...) aprovechamiento por parte de grupos descontentos de las decisiones estatales y los recursos existentes, para desarrollar organización autónoma y movilización colectiva desafiante”. (2009; 1). De este modo, explora en el “complejo cruce de estrategias entre la acción estatal y la acción colectiva, y de moldeamiento recíproco entre la organización estatal y la organización de los

movimientos sociales” (2009; 1), afirmando que el caso de los movimientos de desocupados de la Argentina resulta valioso para abordar algunas inquietudes analíticas vinculadas a las relaciones que existen entre el patrón de organización y acción colectiva de los desocupados y la evolución de las políticas y programas de empleo, así como a la incidencia de las políticas públicas de empleo en la estructuración social y política de las organizaciones de desempleados, entre otras.

Entre este grupo de autores también puede mencionarse a Rossi (2017), quien pone el foco en el esquema de interacciones entre el movimiento piquetero con las instituciones del Estado; vínculos que se forjan a través de canales formales e informales. Dicho esquema de interacciones se compone, de acuerdo al autor, de dos elementos principales que refieren a la evolución de las políticas públicas sobre el desempleo, por un lado, y a la tensión entre gobernabilidad territorial / disrupción por otro. “Para el primer elemento, son cruciales las divisiones dentro del aparato del Estado, tales como conflictos entre ministerios. Para el segundo elemento, hay dos tipos de divisiones posibles de la elite: dentro de la misma escala de acción (por ejemplo, entre miembros del partido en la misma coalición de gobierno) y a través de múltiples escalas de acción (por ejemplo, entre los intendentes y el gobernador en una provincia)”. (2017; 221). Las oportunidades políticas, entonces, constan de estos dos componentes fundamentales que refieren a divisiones hacia dentro de las elites.

Por su parte, Garay (2017) también se encarga de reconstruir el escenario político en el cual la protesta social toma forma. En este sentido, señala que el factor crítico de la estructura de oportunidades políticas dentro de la que se desenvuelve la movilización piquetera consiste en una coyuntura con gobiernos en apuros y proclives a hacer concesiones para mantenerse en el poder. Además, sostiene que las políticas sociales consistentes en programas variados dirigidos a los sectores de la población más vulnerable constituyen un determinante de peso en la consolidación de las organizaciones, en tanto las provee de recursos adicionales, promueve incentivos para la reclutación de adherentes y les permite administrar sus propios proyectos de trabajo.

A pesar de la heterogeneidad que representan los diversos autores y estudios mencionados, podemos decir a grandes rasgos que proponen abordajes teóricos en los que lo político -sea en términos de protesta social o de estructura de oportunidades políticas- constituye un factor determinante en la construcción de identidades políticas y en el despliegue de la acción colectiva. La potencialidad de estos estudios y su contribución al presente trabajo reside en aportar claves analíticas para explorar la mutua incidencia entre la organización de los movimientos sociales con diferentes instancias gubernamentales, tomando como elemento decisivo las políticas públicas, en un contexto en el que las demandas suelen estar dirigidas al Estado.

Sin embargo, estos enfoques dejan algunas vacancias analíticas referidas, especialmente, a la construcción identitaria; vacancias que serán cubiertas por la perspectiva de los nuevos movimientos sociales.

1.1.2 Nuevos movimientos sociales

Como en el caso de la “movilización de recursos”, los autores que se inscriben en la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales buscan superar las limitaciones de los enfoques clásicos y generar nuevas claves explicativas que den cuenta de las características que asumen los movimientos sociales nacidos entre los sesenta y setenta. Se trata de movimientos que rompen con el paradigma contenido en los ejes luchas de clases/ ideología política que caracterizaba a la arena política tradicional, y que responden a nuevas necesidades, dando como resultado nuevas formas de lucha.

Algunos de sus autores clásicos (Jürgen Habermas, Claus Offe) parten de teorizaciones acerca de las contradicciones que se hallan en el corazón de los Estados de Bienestar y del capitalismo tardío en general. Las sociedades contemporáneas son caracterizadas, por estos autores, como sociedades crecientemente complejas y diversas, cualidades que implican el florecimiento de nuevos conflictos en los ámbitos de la reproducción cultural y la integración social más que en los ámbitos de reproducción material. “El planteamiento consiste, grosso modo, en que los cambios en las sociedades europeas han generado nuevas

necesidades en los individuos y que éstas surgieron como consecuencia del desarrollo económico de la posguerra. Es así como los nuevos valores giran alrededor de la autonomía del individuo frente al Estado y de la construcción de identidades colectivas que le den un nuevo sentido a la vida” (De la Garza Talavera; 2011; 114).

Debido al nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas, cada vez más son los valores los que se ponen en discusión, y de alguna manera los intereses se ordenan de acuerdo a ellos. Retomando a Iglesias (...), “la nueva gramática que dibuja el conflicto social impone que lo político tenga que apoyarse en los aspectos culturales, en los valores y en lo subjetivo de los protagonistas de las protestas sociales”.

En las teorías sociales europeas dentro de las que se encuentran autores tan diversos (Habermas, Offe, Touraine, Melucci, Cohen y Arato, entre muchos otros), la construcción teórico-conceptual de los movimientos sociales gira en torno a la identidad de los actores colectivos y de la orientación cultural de sus acciones. Es en este contexto que lo político, de acuerdo a dicha perspectiva, no puede concentrarse exclusivamente en el accionar contencioso -privilegiado por la corriente de la movilización de recursos- ni reducirse a lo institucional y organizativo. En todo caso, el accionar contencioso de los actores se afina sobre aspectos simbólicos, culturales y sobre el conjunto de significaciones sociales de los que protagonizan las protestas, en un espacio conflictual. El contenido ético de las demandas de los movimientos sociales abre el juego para reparar analíticamente en los aspectos mencionados y para caracterizar a las sociedades postindustriales.

Como señala Boaventura de Souza Santos (2001; 178) “La novedad más grande de los nuevos movimientos sociales reside en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material”.

Uno de los pensadores más emblemáticos de este enfoque es Alain Touraine, quien menciona las cualidades que debe reunir la acción colectiva organizada para ser considerada un movimiento social. En este marco, establece tres principios básicos que definen a los movimientos sociales: el de identidad, referido a la definición que hace el actor de sí mismo; luego el principio de oposición, referido a la capacidad de localizar al adversario que surge en el conflicto; y el de totalidad, vinculado a la capacidad que tiene el movimiento de trascender al sistema histórico. Para dicho autor, la existencia de un conflicto resulta decisiva. Es que si bien un movimiento social sólo se puede organizar si la definición que hace de sí mismo es consciente, es el conflicto el que constituye y organiza al actor, en tanto la formación del movimiento precede su consciencia (Touraine; 1973). El conflicto esencial refiere -nada más y nada menos- que a la orientación de la “historicidad”, concepto clave en el desarrollo conceptual de Touraine. Esta designa la capacidad de una sociedad para producirse a sí misma e intervenir en su propio funcionamiento, lo cual implica que no deba depender de un orden externo para devenir su propio fundamento, que se auto-produzca (Touraine; 1973)

Pero la historicidad no constituye el único nivel de la acción social, y los actores combinan en sus actos y discursos distintos niveles de significación. Es decir, pueden existir en un primer orden reivindicaciones concretas, específicas, que sitúan la lucha a nivel de la organización. Luego, puede tenerse por objetivo mejorar la posición de los que protestan en las negociaciones sociales o en las instituciones nacionales, lo que se referiría entonces al segundo nivel llamado “político/institucional”. Finalmente, los actores pueden cuestionar la organización social en su conjunto, luchar por desafíos culturales, buscando transformaciones profundas de la sociedad y el control del progreso y de la producción. Es en este último caso que la lucha se coloca al nivel de la historicidad (Pleyers; 2006; 172). En este marco, la batalla librada por los nuevos movimientos sociales sucede eminentemente en el ámbito de la experiencia histórica de una sociedad.

De acuerdo a Múnera Ruiz (1993; 7), retomando a Touraine, “Este autoreconocimiento, reconocimiento del adversario, del terreno y de las apuestas en juego, así como la capacidad de superar las pretensiones sectoriales del actor

colectivo y proyectarse en el plano societal, amplía el ámbito cultural de los movimientos sociales. También abre, para la teoría de la acción colectiva, un campo de estudio inexistente en la perspectiva de la racionalidad económica o estratégica y extraño a la internalización pasiva de valores en el funcionalismo. Es, desde otro punto de vista, una respuesta a la pregunta sobre el paso de la acción individual a la colectiva. El papel preponderante de la búsqueda y construcción de la identidad sobre el cálculo racional y el juego estratégico, convierte al movimiento social en un fin para los actores individuales y le quita el carácter de medio que tenía en el paradigma de la movilización de recursos”.

Alberto Melucci, autor destacado en el actual enfoque, también parte de una crítica a los enfoques tradicionales y estudia los movimientos sociales en tanto “sistemas de acción que operan en un campo sistémico de posibilidades y límites” (1999; 37). Propone, para ello, una definición analítica de movimiento social que consta de tres dimensiones constitutivas: “La definición analítica que propongo de movimiento social como forma de acción colectiva abarca las siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción”. (1999; 46). Así, los actores producen acción colectiva en tanto son capaces de definirse a sí mismos y de definir el campo de acción. La definición que construye el actor de sí mismo no es lineal, sino que es producida por interacción y negociaciones, y algunas veces por diferentes orientaciones opuestas. Es a partir de la existencia de una identidad colectiva -en tanto capacidad de definirse a sí mismo y de definir a su ambiente- que los actores son capaces de forjar expectativas comunes y cotejarlas con el entorno y su estructura de oportunidades políticas. En tanto construcción colectiva, esta identidad no puede darse por supuesta como sucede en el enfoque de la movilización de recursos.

De modo que los movimientos sociales deben ser explicados en función del surgimiento de un “nosotros” que comparte tres clases de orientaciones: los fines de la acción, los medios y las relaciones con el ambiente. Así, el sistema de acción multipolar se organiza a lo largo de estos tres ejes (fines, medios y ambiente), a los cuales se puede ver como un conjunto de variables interdependientes que se

encuentran en estado de mutua tensión. Retomando las palabras del autor, “la forma organizada de la acción es la manera mediante la cual el actor colectivo busca darle una aceptable y duradera unidad a ese sistema, que está continuamente sujeto a tensiones”. (Melucci; 1999; 43). En este enfoque, resulta clave considerar la diversidad como un elemento central en la explicación de la formación de identidades colectivas; justamente, es a partir de la diversidad que subyace hacia dentro de los movimientos sociales y sus múltiples relaciones internas que puede darse el proceso de creación de una identidad compartida.

Dime de dónde vienes y te diré quién eres

Desde sus comienzos, el movimiento piquetero fue un conjunto diverso y heterogéneo de organizaciones, incluso cuando en un contexto de crisis y escalada del conflicto -entre 2000 y 2001- las distintas organizaciones coordinaron actividades conjuntas, y aparecieron públicamente como un movimiento -el de los desocupados- relativamente homogéneo.

Es por ello que, en la constitución y consolidación de una misma identidad política, en este caso la piquetera, debe considerarse la existencia de culturas políticas diversas y de distintos modos de concebir el accionar colectivo.

En ese marco, Svampa (2008) recupera la diversidad de “corrientes político-ideológicas” que coexisten hacia dentro movimiento piquetero. Estas corrientes incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista, entre las que se encuentran algunas vinculadas a los partidos de izquierda y las que plantean la autonomía respecto de los partidos y del Estado. Asimismo, el concepto de “matriz político ideológica” de la autora permite distinguir conceptualmente cómo coexisten diferentes construcciones identitarias en un mismo espacio político que, en este caso, sería el campo piquetero. Efectivamente, como expresa la autora (2008; 21) “pese a la heterogeneidad político-ideológica, la existencia de un repertorio de acciones comunes y el desarrollo de una estrategia de cooperación entre las diferentes corrientes hizo posible que pudiéramos hablar de un “movimiento piquetero”. Sin embargo, las organizaciones piqueteras -que ya mostraban una gran heterogeneidad ideológica

y una tendencia cada vez mayor a la fragmentación- siguieron por caminos distintos, por lo que sus distintos derroteros pueden reconstruirse, en gran medida, a partir de las diversas historias de las organizaciones y de su construcción identitaria específica.

Cabe añadir un componente importante en el estudio de las identidades políticas de origen piquetero fructíferamente explorado por Denis Merklen que es el de su “inscripción territorial”. En palabras del autor, la inscripción territorial de las clases populares supone “Un modo de inserción social, un modo de estructuración de las clases populares a través del barrio y una forma de la política popular, una vía de conexión con las instituciones y un punto de apoyo para la acción colectiva. Frente a la descomposición de los lazos por el trabajo y a la desarticulación de las protecciones sociales, observamos el fortalecimiento de lazos de cooperación y de proyección hacia la sociedad estructurados a nivel local.” (Merklen, 2010: 14). Así, observamos que para el autor el barrio constituye una fuente de identidad importante para las categorías populares en Argentina, algo que Svampa (2005) ha tematizado en términos del “pasaje de la fábrica al barrio” con la emergencia del mundo comunitario de los pobres urbanos.

Finalmente, consideramos valioso el concepto de “clases populares” desarrollado por Svampa (2005) y retomado en Iglesias (2015). Debido a que la heterogeneidad de situaciones sociales constituye un rasgo característico de las sociedades latinoamericanas, Svampa entiende que “(...) el referente empírico del movimiento social histórico no ha sido la clase obrera sino, más bien, las clases populares, en plural y en un sentido amplio, cuyo contenido designa ‘mundos heterogéneos, entre los que se cuentan indígenas, campesinos, trabajadores informales y clase obrera urbana’. Por ello mismo, la acción colectiva ha estado marcada desde el inicio por una multiplicidad de dimensiones y llamados, en nombre de la clase, la nación y el antiimperialismo, sin que ninguno de ellos lograra un primado estructural sobre los otros. (Svampa en Iglesias; 2015; 137).

Acción colectiva a pesar del Estado

En sintonía con lo expuesto anteriormente, el enfoque de los nuevos movimientos sociales, tal como reconstruye Iglesias (2015), considera al Estado y a sus iniciativas en términos contextuales o como trasfondo necesario, pero no determinante, para la explicación.

Si bien la cuestión en torno a la incidencia que distintas iniciativas tomadas por el Estado tuvieron en el desarrollo del movimiento piquetero se ha erigido en una dimensión de peso en el actual enfoque de los movimientos sociales, el corazón de las interpretaciones en torno a la emergencia y consolidación de la acción colectiva piquetera continúa residiendo en la constitución identitaria del movimiento.

La contrapartida de esto es concebir a las iniciativas estatales y a la política gubernamental en términos de integración, cooptación, disciplinamiento y, en algunos casos, represión.

Con este punto de partida, Svampa observa los cambios que sufrió la “identidad piquetera” en el caso de algunas organizaciones como Barrios de Pie y el Movimiento Evita. En el contexto de su incorporación al gobierno de Néstor Kirchner, dichas organizaciones comienzan a definirse como “organizaciones sociales” y toman distancia del piquete como estrategia de lucha y apuntan a construir su identidad en torno a la militancia social y al trabajo territorial, reivindicando de esta manera una tradición más movimientista. (Svampa; 2008). De este modo, incorporadas al esquema de gobierno, las organizaciones pueden atenuar su carácter contestatario y reivindicativo, y con ello desvirtuar su potencial de transformación.

Siguiendo con esta perspectiva, resulta pertinente traer el concepto de “institucionalización conflictiva” desarrollado en la investigación de Bruno y Coelho (2017) y por Dinerstein (2010). Para Dinerstein et. al. (2010), la institucionalización resulta conflictiva cuando se trata de una “(...) integración contradictoria de los proyectos alternativos de las organizaciones en el seno estatal” (2010: 72). De este modo, como sostienen Bruno y Coelho (2017; 98) “el vínculo entre el Estado y las organizaciones populares está plagado de contradicciones, las que repercuten y se reproducen no sólo al interior de las organizaciones sino también al interior del Estado y sus instituciones. La tensión entre la necesidad de afirmar prácticas

colectivas a nivel territorial y comunitario (a menudo, oponiéndose al Estado) y la “dependencia” con el poder estatal para llevarlas adelante va a generar una tensión entre heteronomía y autonomía estatal que atravesará y acompañará las experiencias de las organizaciones del campo popular”. Con este concepto, los autores caracterizan la lógica de vinculación que predominó entre las organizaciones y movimientos de trabajadores desocupados y el Estado durante el kirchnerismo –superada la dinámica de movilización y negociación vía ocupación de espacios públicos- e incluso la etapa abierta con la alianza de Cambiemos en el gobierno. Por extensión, podríamos pensar que se trata de un concepto fructífero para caracterizar las tensiones que suscita hacia dentro de las organizaciones su alineación al gobierno de turno.

Finalmente, dicho concepto resulta de interés en tanto permite explorar la tensión que atraviesa y acompaña las experiencias de muchas organizaciones sociales, que es tensión entre heteronomía y autonomía estatal: “(...) la tensión entre la necesidad de afirmar prácticas colectivas a nivel territorial y comunitario (a menudo, oponiéndose al Estado) y la dependencia con el poder estatal para llevarlas adelante” (Bruno et al.; 2017; 98).

1.2 Recapitulación del marco teórico

A modo de síntesis, diremos que el enfoque de la movilización de recursos posee su mayor potencial explicativo cuando se analiza el contexto político en el cual se emplaza la acción colectiva, especialmente si está dirigida e interpela a autoridades estatales. Sin embargo, provee de escasos recursos para pensar los modos que ha elaborado la sociedad para protestar, y la fusión de prácticas y culturas políticas del pasado con las del presente. En este enfoque, los aspectos culturales ocupan un lugar secundario y son pensados a la luz del accionar contencioso y de las oportunidades políticas. Es en este marco que el enfoque de los movimientos sociales viene a suplir tales limitaciones y a reivindicar los aspectos culturales y simbólicos que subyacen al accionar colectivo y que explican la constitución identitaria de los movimientos sociales; lo identitario cobra protagonismo.

A los fines de nuestra investigación, consideramos conveniente partir de la perspectiva conocida como “europea” o “identitaria” ya que aporta una conceptualización más enriquecedora en torno a los modos de construcción de las identidades políticas contemporáneas.

Sin embargo, teniendo en cuenta los casos elegidos para el presente trabajo, consideramos necesario incorporar el concepto de estructura de oportunidades políticas proveniente del enfoque de la movilización de recursos. Consideramos que se trata de un aporte fructífero para explorar la relación entre los movimientos sociales y el gobierno, así como las formas en que lo identitario puede ser pensado a la luz de las concepciones que tienen sus actores sobre las políticas sociales y las iniciativas estatales.

Dicha incorporación es un intento por achicar la brecha analítica existente entre el enfoque de movilización de recursos que considera al Estado como eje explicativo y el de los movimientos sociales que lo concibe como mero contexto - brecha señalada por Iglesias (2015; 144)-, abogando por una aproximación en donde se considere la mutua incidencia entre el accionar de los movimientos sociales y la implementación de iniciativas estatales.

1.3 Aspectos metodológicos

El abordaje metodológico que estructura el presente trabajo se inscribe dentro de las estrategias cualitativas de investigación, las cuales resultan más apropiadas para el tipo de investigación propuesto y los objetivos de tipo descriptivo.

Las técnicas de investigación consistieron en el análisis de contenido, en primer lugar de datos primarios y luego secundarios.

Para la recolección de datos primarios se acudió a entrevistas en profundidad semi-estructuradas. El criterio de selección de los informantes clave obedeció a: 1. conocer la historia de la organización, 2. ser responsables o dirigentes jerárquicos de la organización y, 3. conocer los criterios mediante los cuales se tomaban decisiones sobre los cursos de acción a seguir por la organización y sus miembros. El guion de entrevista remitió a los diferentes modos en que se produjeron las

construcciones identitarias de las organizaciones bajo estudio y, asimismo, las diferentes modalidades con que se relacionaban con el Estado.

A partir de ello, cabe considerar que la información surgida en las entrevistas realizadas a dirigentes y referentes de las organizaciones sociales permitió dar cuenta de la construcción política e identitaria de dichas organizaciones. A través del relevamiento de algunas dimensiones claves referidas a su historia y trayectoria, a su posicionamiento ante la política social, y a la relación que entablan con los gobiernos y con el Estado en general, pudimos arribar a su modo de construcción política e identitaria, así como detectar continuidades y rupturas de este proceso.

Asimismo, se consultaron fuentes periodísticas y bibliográficas para reconstruir el contexto histórico, político y económico, y contrastar la información obtenida de los entrevistados con otras fuentes de información que enriquecieron el trabajo y contribuyeron a complejizar nuestro objeto de estudio.

CAPÍTULO II

1. Nueva identidad piquetera: origen común, devenires distintos. Breve contextualización

Si hay que situar en tiempo-espacio lo que fue el nacimiento de la identidad piquetera, podemos remitirnos a los acontecimientos de movilización de desempleados que tuvieron lugar en 1996 y 1997 en Cutral-Có y Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, y en Tartagal y Mosconi, en la provincia de Salta. El nombre con el que se llamó a quienes protagonizaron tales eventos fue el de “piqueteros”, en referencia al método de protesta utilizado, el piquete. No se trataba de un formato totalmente nuevo, ya que había sido utilizado en el pasado por trabajadores en conflicto, bajo la modalidad de barricada en la entrada de fábricas, para impedir el ingreso de rompehuelgas, y luego bajo la modalidad de cortes de ruta para impedir el tránsito especialmente en zonas rurales. La novedad la aportó el hecho de que personas desocupadas acudieran a él para exigir a las autoridades respuestas ante el problema del desempleo, y que esta forma de llamarlas constituya el punto de partida para el nombramiento de una identidad política.

Dichos episodios de protesta social fueron identificados por distintos dirigentes sociales como eventos pioneros que motivaron la escalada de movilización en otras partes del país. Ejercieron, como diría Sydney Tarrow retomado en Torre (2019), un “efecto demostración”. Ya en el año siguiente, el gran Buenos Aires se convirtió en un mosaico de movilizaciones, y la organización del descontento viró hacia formas cada vez más sólidas de acción colectiva. En esta primera etapa, entonces, la organización del accionar contencioso, el “ocupar el espacio público para negociar” (Torre; 2019; 177) fue el medio por excelencia de los sectores con menos recursos para exigir el otorgamiento de subsidios. Es por ello que Svampa y Pereyra (2003) señalan dos factores que permitieron el ascenso de los piqueteros como movimiento social. Por un lado, la adopción de cortes de ruta como medida generalizada y, por otro lado, la rápida institucionalización de una

respuesta por parte del Estado vía planes sociales otorgados por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales.

En este marco, la creación de los programas de asistencia al desempleo a partir de 1996 fue un poderoso acicate para la movilización de los desocupados al aportar un objetivo común de política. La concesión de nuevos “planes sociales” - como los “Planes Trabajar” otorgados luego de las movilizaciones de Cutral-Có, Plaza Huincul y Tartagal y Mosconi- y la perpetuación de los ya existentes proporcionaron a los movimientos de desempleados un objetivo tangible, factible y unificador (Kaese, Wolff; 2016), en un contexto en que la política social ganaba cada vez más terreno y operaba como mecanismo de contención de aquellos sectores, y en el que la Secretaría de Desarrollo Social devino ministerio.

Con el nuevo gobierno de Fernando de la Rúa, algunas organizaciones piqueteras pasaron a gestionar de forma autónoma parte de los subsidios sociales y los correspondientes proyectos de desarrollo local; iniciativa que respondió en parte al intento por parte del gobierno de la alianza de contrarrestar el poder del aparato del partido justicialista, con sus intendentes y punteros.

En 2002, a la luz de la experiencia de movilización callejera de diciembre de 2001 y ante una transición difícil del gobierno, Eduardo Duhalde introdujo un nuevo plan social, el “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, que llegó a aproximadamente unos dos millones de hogares, como se exhibe en un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales del año (CELS) del año 2003¹. Las organizaciones de desempleados, a través de continuos cortes de ruta, pugnaron por la concesión de dichos planes sociales (así como de ayuda alimentaria) y consiguieron, en algunos casos, el derecho a administrar íntegramente los fondos y proyectos correspondientes. Esto marca un hito en la trayectoria de las organizaciones y el nacimiento de un clivaje dentro del movimiento piquetero, que respondió a la relación que establecieron las organizaciones con el Estado y con el gobierno de turno. Como sostiene Rossi (2017; 222): “La presidencia de Duhalde vio el comienzo de una nueva relación predominante, que denomino como *acuerdos*

¹ El documento puede encontrarse en el siguiente link:

https://www.cels.org.ar/common/documentos/analisis_jefes_jefas_oct2003.pdf

para la sostenibilidad de la gobernabilidad, una modalidad que aplica a la mitad del grupo de las principales organizaciones piqueteras y que implicó la estandarización de la lógica iniciada por De la Rúa”.

En el contexto de implementación del PJJHD, se crearon comisiones de consulta y asesoramiento en las que algunas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa y la Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) tuvieron un lugar importante, erigiéndose los líderes piqueteros como interlocutores en la negociación entre el Estado y las organizaciones. Como expresa Torre (2019) citando a Golbert (2004): “Por primera vez se confería la capacidad de discutir la política social a un actor que carecía de una relación formal con el mercado de trabajo”, como expresa Torre (2019; 184). Respecto a otras organizaciones de desocupados como el MTR y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, CTD “Aníbal Verón”, estas permanecieron al margen de dichos acuerdos y, por lo tanto, se refugiaron en un posicionamiento más confrontativo.

Con la sucesión de las gestiones kirchneristas, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, este clivaje entre organizaciones en función de su relación con el Estado tendió a profundizarse: las organizaciones siguieron distintas trayectorias ya que el gobierno de Néstor Kirchner decidió ensanchar su base social y territorial a través de una incorporación selectiva de aquellas organizaciones más afines al peronismo de izquierda. Se trató de un periodo en el que se dio un proceso de recuperación de la actividad económica y de aumento en los niveles de empleo, y en el que desde el gobierno se tomó la decisión de no reprimir el conflicto social. Mientras que algunas organizaciones -principalmente las de tradición nacional-popular- se integraron al gobierno, otras optaron por continuar con su accionar beligerante, aunque en términos generales puede hablarse de un repliegue del movimiento piquetero.

Pese a las mejoras significativas en materia social, de redistribución del ingreso y de creación de nuevos puestos de trabajo, el crecimiento se estancó y no logró crear el suficiente empleo registrado como para absorber a toda la mano de obra de la clase trabajadora. En este marco, como expresa González (2022; 5) “(...) los sectores informales, antes piqueteros, ahora excluidos del sistema laboral

formal, se consolidaron como beneficiarios de políticas sociales no salariales que mejoraron su calidad de vida, pero no modificaron su lugar en la estructura económica y social (Piva, 2018). A pesar del mejoramiento de las condiciones de vida de grandes segmentos de la sociedad argentina, la brecha al interior de los sectores populares entre trabajadores formales con derechos y receptores de políticas sociales persistió”.

No podemos dejar de mencionar que la crisis internacional de 2008 / 2009 produjo distintos efectos en el contexto nacional, tal como sostienen Galliano (2020) y Natalucci (2019). El primero señala que la crisis obligó a pensar en formas no laborales de integración social y en pensar en “bolsones sociales permanentemente fuera del salario” (Galliano; 2020; 129), que condujeron a la adopción de políticas sociales para los sectores desvinculados del empleo formal y a una reformulación de la base política del proyecto kirchnerista, el cual terminó recostándose cada vez más en organizaciones sociales “de la economía popular” (2019; 130). En esta dirección, puede identificarse la importancia que ganó el plan “Argentina Trabaja”, como política destinada a personas en situación de vulnerabilidad que apuntó a la generación de puestos de trabajo, la capacitación y la promoción de la organización cooperativa. Como señalan Bruno et al. (2017; 100) “el impulso de este Programa que implicaba la conformación de cooperativas, al tiempo que generó un crecimiento de la base social de los movimientos kirchneristas provocó movilizaciones, piquetes y acampes de los movimientos de la izquierda independientes que pugnaban por ingresar al Programa”.

Por su parte, Natalucci (2019) sostiene que, en el marco de la coyuntura posterior a 2015, las organizaciones de trabajadores hicieron una relectura de dicha crisis internacional que las llevó a repensar sus concepciones en torno al trabajo y a las modalidades organizativas que habían tenido hasta entonces. En efecto, las organizaciones sociales plantearon que frente a la imposibilidad de alcanzar el pleno empleo en las sociedades pos-industriales, era necesario que el gobierno subsidiara el trabajo y que el Estado se erija como la “patronal” a la cual reclamar derechos

laborales². Dicho planteo coincidió con el rumbo seguido por el gobierno a partir de 2009 y la implementación de políticas públicas de promoción de la economía social³.

De esta forma, en paralelo al aumento de los sectores sociales no asalariados y situados al margen del mercado de trabajo, observamos que las organizaciones sociales de origen piquetero cobraron una importancia creciente durante los sucesivos gobiernos. Asimismo, advertimos muchas de ellas -nacidas en circunstancias similares- se consolidaron con el paso del tiempo y transitaron por caminos muy diversos. Esta diversidad, debida principalmente a su heterogénea construcción político-identitaria, condujo a distintos posicionamientos frente al Estado, a miradas distintas acerca de la política social, así como también a distintos tipos de accionar contencioso y político.

2. Identidad piquetera, mamushka de identidades

Como señalamos previamente, la identidad piquetera -otrora articulada, a pesar de sus diferencias, por un repertorio de acción común- abrió el escenario a otras identidades políticas. De esta manera, resulta necesario caracterizar el proceso de construcción identitaria de las organizaciones mencionadas, a partir de los tres principios propuestos por Melucci: solidaridad, conflicto, y rompimiento de los límites del sistema.

2.1 De dónde venimos y quiénes somos

El primer principio se refiere a la capacidad de los actores para compartir una identidad colectiva. De acuerdo a Melucci, (1999; 46) “Antes que todo, la acción colectiva debe contener solidaridad, es decir, la capacidad de los actores de

² Al respecto, puede consultarse el manual de formación de la CTEP de “Organización y economía popular”, de Juan Grabois y Emilio Miguel Angel Pérsico.

³ Como señalan Bruno et al. (2017; 99) “El apelativo economía social utilizado por el gobierno kirchnerista toma como referencia conceptualizaciones elaboradas por Alejandro Rofman y José Luis Coraggio. Esta denominación funcionó como paraguas para una serie de programas elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social centrados en la promoción del trabajo autogestivo y familiar tales como: el monotributo social, la Ley Nacional de Microcrédito, La ley de Marca Colectiva y el Programa de Ingreso Social por Trabajo (PRIST) Argentina Trabaja. Lo relevante de estas políticas sociales es el cambio de orientación de políticas sociales de corte asistencial y focalizado hacia otras centradas en la promoción del trabajo”.

reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como miembros del mismo sistema de relaciones sociales”. Para este proceso primario de identificación, es necesario reconstruir la matriz político-ideológica de la cual provienen, cuáles fueron sus modulaciones y, finalmente, caracterizar el modo en que se definen actualmente.

2.1.1 Movimiento Evita

El Movimiento Evita surgió en el año 2005, cuando diversos sectores confluyeron en el objetivo común de articular un movimiento social que integrase a distintas organizaciones y militantes de trayectoria heterogénea, pero que compartían un diagnóstico similar a partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder: que se abría un nuevo horizonte político y económico que dejaba atrás a la política neoliberal.

Sin embargo, sus orígenes pueden rastrearse unos años antes, específicamente hacia finales de 2001, con la conformación de Pan y Poder para el Pueblo, “las 4 P”. Esta organización -formada en la ciudad de La Plata- se nutrió de militantes provenientes del movimiento piquetero, principalmente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) “Aníbal Verón”, que tenía al Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) “Quebracho” como organización política de referencia. De acuerdo a un dirigente entrevistado del Movimiento Evita, las “4 P” es el grupo originario del Movimiento Evita con el que, a partir de 2003, se articularon otras organizaciones menores y militantes con trayectoria en el Peronismo Revolucionario para fundar el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD-Evita). El grueso de los integrantes del MTD-Evita eran trabajadores desocupados que habían tenido un rol activo en lo que fue la “resistencia al orden neoliberal”. En Rosario, este agrupamiento recibió el nombre de “Frente de Agrupaciones Peronistas para la Victoria”.

En palabras de Schuttemberg (2021; 18) “(...) esta organización [MTD-Evita], ligada a la representación de los desocupados y sustentada en el piquete como forma de reclamo ante el Estado, confluyó en una organización de características más amplias que sería luego el Movimiento Evita, con aspiraciones a nuclear un frente más extenso, entre los cuales continúa el de Trabajadores Desocupados”. El

autor ratifica lo que menciona José “Pepe” Berra, dirigente histórico del movimiento, en ocasión de la entrevista realizada para este trabajo: “A partir del año 2005 es que se conforma el Movimiento Evita, ya con una visión menos vinculada al piqueterismo y más vinculada a la organización político-social y al movimiento social”. En relación al alejamiento de la identidad piquetera, cabe también citar el aporte realizado por otro de los dirigentes entrevistados, quien refiere al carácter instrumental de los formatos de acción colectiva, específicamente del piquete. “La huelga no es un método posible para nosotros. Lo único que queda es la movilización en la calle e intervenciones de otro tipo. Yo creo igual -y es algo que todas las organizaciones del campo nacional y popular se están planteando- que es que hay que ser más creativos en las formas de pelear y plantear un modelo alternativo de gobierno. Son herramientas históricas porque son efectivas, y la que tienen los trabajadores para hacerse escuchar. Pero hay que desarrollar otro tipo de herramientas para pelear de una forma distinta. O por ejemplo construir un espacio político y disputar en la política también las necesidades o reclamos que tenemos”.

En simultáneo a la atenuación del carácter eminentemente antagónico característico de la identidad piquetera, se da el viraje desde una organización de trabajadores desocupados a un movimiento de bases más heterogéneas. Como cita Schuttemberg (2021; 18) tomando las palabras de un dirigente del Evita, “(...) el MTD se incorporó al frente territorial y se denominó Movimiento Evita por Trabajo y Dignidad. Ahora se llamaba así porque ya no solo representaba a los desocupados, o sea que al haberse incorporado más gente al trabajo ya no era solamente de los desocupados”.

En este recorrido es que, de acuerdo a lo expresado por otro referente del Movimiento Evita de la ciudad de Rosario, se da el salto a la política. De ser “movimientos de trabajadores desocupados” o “movimientos de desocupados”, empiezan a autodefinirse como organizaciones sociales, como movimientos sociales, “(...) que discuten ‘no sólo somos desocupados, tenemos hambre, queremos trabajo’, sino que avanzan en discutir políticas de Estado, en disputar espacios de la política siempre en una medida muy pequeña o siendo siempre furgón de cola de los sectores de la política tradicional más institucionalizados”.

De este modo, la lucha piquetera que a veces versaba sobre las necesidades más inmediatas, especialmente los alimentos, desatada hacia el final del gobierno de Menem y al comienzo del gobierno de la Alianza, comenzó a ser percibida por algunos de los actores que protestaban como insuficiente. Esa lucha por las necesidades más inmediatas, por acceder a un bolsón de comida, “tenía un agotamiento”, como expresó Berra. Era necesario, entonces, dar un salto para poder tener algún grado de influencia política; la pelea no sólo era social, era eminentemente política. “Con Néstor nace el movimiento que no solo integra compañeros que venían de la lucha social, sino distintos compañeros con un perfil más político”.

Asimismo, en el marco del proceso descrito en el apartado anterior caracterizado por la adopción de políticas promoción de la economía social y de fortalecimiento de distintas organizaciones sociales y de su del trabajo territorial, el Movimiento Evita fundó junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la cooperativa textil La Alameda y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (MNER) la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que en 2019 –en un contexto eleccionario- se transformó en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En su crecimiento como organización social que representa a sectores de trabajadores que realizan actividades en la economía informal y que se fortaleció con la política de conformación de cooperativas de trabajo promovida por distintos gobiernos, su perfil fue adquiriendo un cariz cada vez más sindical, y su accionar colectivo se orientó en esta dirección: el reclamo por reivindicaciones sectoriales vinculadas a recursos para los proyectos y emprendimientos productivos, a reclamos por el equivalente a las paritarias de los asalariados –atadas al salario mínimo vital y móvil-, monotributo productivo y personería gremial, entre otras. Asimismo, ensayó estrategias de articulación con la CTA y, principalmente, con la CGT, a la cual aspiraba a integrar. Como sostiene uno de los dirigentes entrevistados, “somos el sindicato de los excluidos, de los trabajadores sin patrón”.

A esta altura, estamos en condiciones de realizar algunas afirmaciones sintéticas que se desprenden del discurso de los dirigentes y de la reconstrucción

histórica realizada hasta el momento. En primer lugar, el gobierno de Néstor Kirchner significó un punto de inflexión en la historia del movimiento. La tradición nacional-popular en la que se inscribe el Movimiento Evita como gran organización social nutrida de otras organizaciones encontró un gobierno afín en términos ideológico-políticos; gobierno que además procuró ampliar las bases de sustentación en el poder a través de la incorporación de actores sociales y políticos que estaban por fuera del Partido Justicialista.

Si bien se reconocen las limitaciones que existen en su relación con el gobierno, ya que como expresa un dirigente entrevistado, “siempre se trató de disputar espacios de la política en una medida muy pequeña o como furgón de cola, la incorporación de dirigentes del Movimiento Evita en algunos espacios institucionales de relevancia social durante los gobiernos kirchneristas los condujo a percibir la apertura de nuevos horizontes y a tener una vocación de trascender reclamos más particularistas.

“Al tener el movimiento dentro suyo distintas expresiones que tienen que ver más con la política y expresiones que tienen que ver más con la lucha social, alguna otra expresión que tienen que ver con luchas específicas de sectores específicos como puede ser el sector de LGTB, o sea, distintos frentes, es un movimiento muy difícil de definir, o sea, porque estamos en todos los frentes, somos un movimiento social, porque estamos en la lucha social, estamos en el territorio peleando por las reivindicaciones, somos un movimiento político. También es un movimiento político porque nos presentamos a elecciones, tenemos diputados nacionales y también somos una expresión importante de lo que es el sindicato de la economía popular que es la UTEP entonces, o sea, es multifacético”. Es a la luz de esta trayectoria histórica y política que puede definirse al Movimiento Evita como organización.

2.1.2 Corriente Clasista y Combativa

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una organización piquetera que hunde sus raíces sindicales y políticas en la tradición del clasismo; corriente político-ideológica que parte de la idea de la lucha de clases y de la unidad de la clase obrera para la defensa de sus intereses. Se nutre del sindicalismo clasista

pregonado por el dirigente gremial René Salamanca, referencia insoslayable en la construcción identitaria de esta organización.

De acuerdo a Eduardo Delmonte, dirigente entrevistado, “hubo un periodo en el que el sindicalismo proclamaba la colaboración entre sindicalistas y patrones (desde Yrigoyen hasta Perón), mientras que ‘nosotros’ planteamos siempre el tema de la lucha obrera, de definirnos como clase y de generar las condiciones para defender esos intereses”. Por ello es que se consideran herederos de las Agrupaciones Clasistas 1° de Mayo que en los años 70 tuvieron un peso importante en el movimiento obrero, llegando a dirigir con René Salamanca a la cabeza, el SMATA Córdoba, sindicato industrial más importante del interior del país.

La forma en que las distintas ramas de la CCC se organizan internamente debe su legado también a aquel referente histórico, quien planteaba un esquema de organización en el que los dirigentes gremiales ganen como un obrero especializado, y que los mandatos sean revocables. Asimismo, Salamanca abogaba por el involucramiento de la clase obrera en la política, y por el objetivo de llegar al poder político, por lo que desde las distintas trincheras y espacios se debían también ir tomando definiciones sobre la situación del país. En este marco de involucramiento con la política es que la CCC se referencia en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), al que muchos integrantes de la organización se encuentran afiliados.

Su origen como organización se localiza oficialmente en la realización del plenario constitutivo en el año 1994, en el marco de la “coordinación de la resistencia a la política del menemismo”; coordinación articulada por distintos actores del mundo del trabajo como la incipiente CTA y la fracción de la CGT opositora al menemismo. Este nuevo agrupamiento no procuró en ningún momento erigirse como una central sindical nueva sino como una organización que trabaja dentro de todas las centrales existentes en el país y organiza independientemente de ellas a los desocupados y a los jubilados y pensionados. De este modo, tiene distintas formas organizativas de acuerdo al trabajo que realiza en las tres vertientes de la clase obrera: los obreros ocupados, los jubilados, y los desocupados y precarizados.

En sus comienzos, la CCC tenía que ver con una base de obreros ocupados, de trabajadores ocupados. Algunas de las agrupaciones obreras que integraban la organización participaban de la CGT y de la CTA, pero se trataba de corrientes políticas dentro de las fábricas y los sindicatos, con presencia también en espacios estatales (principalmente docentes). De esta forma, integrantes de la organización dirigían algunos sindicatos, comisiones internas, así como también se desempeñaban como delegados de algunas empresas.

Hacia 1996, la problemática de la desocupación masiva ganó en magnitud y, como menciona Delmonte, activó el debate en torno a si la desocupación constituía una cuestión coyuntural o estructural. En paralelo, Juan Carlos Alderete, dirigente piquetero, organizó una olla popular en La Matanza y levantó como bandera el tema del hambre, que había crecido a niveles inéditos, convirtiéndolo en un problema político para la clase obrera. Es en este periodo que se conforma -aunque de manera subterránea en un principio- la rama de desocupados, que es la más visible actualmente. En el caso de Rosario, un dirigente de la CCC señala que la organización de los desocupados sucedió hacia el año 1998, y que los episodios de Cutral Có fueron cruciales para que dicha organización surgiera.

Otro rasgo característico de esta organización desde sus comienzos es, en palabras de uno de sus dirigentes, el componente mayoritario de mujeres. Ante los despidos de los trabajadores y el empobrecimiento de sus maridos, un grupo de mujeres que realizaba tareas comunitarias y trabajaba en escuelas y en comedores de manera gratuita, comienza a organizarse para obtener planes Trabajar y para que su trabajo sea retribuido de algún modo. De esta forma, la clara mayoría de mujeres entre el universo de desocupados/as y precarizados/as que integra la organización aparece como uno de sus elementos distintivos.

El hecho de erigirse como una corriente política dentro del movimiento obrero que busca organizar a la clase obrera en forma independiente de las patronales y del Estado, conduce a que la organización haya adoptado posicionamientos más confrontativos respecto a los gobiernos y más críticos respecto al Estado. Asimismo, haciéndose eco de una dinámica movimientista, es que no solo cuenta con las tres vertientes mencionadas dentro de la clase trabajadora, sino que también aloja en

su seno organizaciones de pueblos originarios, de ex-combatientes en Malvinas, así como también cuenta con una organización juvenil, la Juventud de la CCC.

Pese a ello, su tradición proveniente de la militancia en ámbitos sindicales y, también, la presencia relevante del componente de desocupados de las fábricas de los años 90 conduce a que la figura que representan sea el “trabajador desocupado, la gran masa desocupada”.

Finalmente, respecto al surgimiento de la CCC como una de las expresiones más importantes del movimiento piquetero y su identificación como organización piquetera, resulta pertinente señalar lo expresado por Delmonte, quien sostiene: “Nosotros tuvimos que encontrar formas nuevas, que no eran nuevas en realidad. En primer lugar, éramos desocupados por lo tanto no podíamos hacer huelga. Fuimos encontrando que no había una sola forma de lucha. Desde el petitorio, la conversación con el funcionario nunca solo, la manifestación, los cortes, etcétera. Creo que, en relación al nombre de los piqueteros, es como si a un obrero le decís huelguista. Hay gente orgullosa porque les da pertenencia y lo respeto, pero nunca le voy a decir así porque nos aleja de los trabajadores, nos aísla. Nos estigmatizan con eso aprovechando un costado flojo de nuestra estrategia, que es la de los cortes que complican la vida a otros trabajadores, pero que los tenés que hacer porque sino no logras nada, no logras visibilidad. Tuvimos que ir desarrollando una estrategia también según el momento político. Ahora los cortes los anunciamos también porque hay un status quo donde no nos reprimen y además los hacemos de corta duración; que sean noticia pero que no jodan tanto”.

De este modo, como ocurre en el caso del Movimiento Evita, sus referentes intentan evitar que el formato de acción colectiva -concebido como instrumento de lucha- sea el elemento que le otorga identidad a la organización.

2.2 Qué (o a quién) enfrentamos

La orientación antagónica de los movimientos sociales se erige como un componente fundamental de su construcción identitaria y del análisis que de ella se hace, por lo que es menester considerar la identificación de un adversario o de un campo del conflicto.

De acuerdo a Melucci (1999; 17), esta dimensión se refiere a “(...) la presencia del conflicto, es decir, una situación en la cual dos adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto común, en un campo disputado por ambos”. Esta dimensión cobra gran importancia ya que, desde la perspectiva de los actores, es el adversario el que impide la realización de las metas y de los ideales del movimiento. Por estos motivos, su identificación en tanto adversario opera como un elemento de cohesión entre quienes integran un movimiento.

2.2.1 Movimiento Evita

Para describir el proceso de construcción e identificación del adversario en el caso del Movimiento Evita, debemos tomar como punto de partida la caracterización que hacen sus dirigentes respecto al conflicto social característico del actual momento histórico. Este conflicto toma forma a partir de algunas dinámicas del sistema capitalista en su estadio neoliberal que, con vaivenes, persiste en la actualidad. En efecto, fue durante el proceso de implementación de las políticas neoliberales y de organización de la resistencia a esa política que distintas organizaciones sociales vieron la luz. En este periodo, el gobierno de Carlos Menem representaba en el nivel nacional la implementación de un modelo económico, político y social que dejó como saldo niveles altos de subocupación y de desocupación.

Sin embargo, al inscribirse en una corriente de matriz nacional-popular, el Movimiento Evita concibe que algunos gobiernos pueden ser aliados de los cambios que pregonan como movimiento social, por lo que tampoco los gobiernos y el Estado son, a priori, el adversario. Eso dependerá del signo político que gobierne. De acuerdo a Berra, “(...) con los gobiernos ‘populares’, la ventaja es que se puede dialogar. Mientras que, con otros gobiernos, la movilización popular o la lucha popular termina en represión”.

Más bien, el campo de relaciones con el Estado se presenta como un espacio conflictual en permanente tensión, que en ocasiones puede apuntalar las demandas de las organizaciones sociales -especialmente si se trata de gobiernos populares- y en otras puede significar un retroceso.

En el periodo de 2019-2023, el proceso de construcción del adversario presenta algunas complejidades. Como organización social que integra el gobierno nacional del Frente de Todos, el Movimiento Evita exhibe algunas ambigüedades en su orientación antagónica. En este sentido es que algunos de los episodios de movilización popular protagonizados por el Evita refieren a demandas o reivindicaciones de dominio o competencia del gobierno nacional, pero son demandas formuladas en términos de eslóganes contra actores económicos o internacionales que no apuntan directamente -o solamente- al gobierno.

Es el caso de la marcha de abril de 2022⁴, de la cual participaron distintos movimientos sociales alineados al gobierno (Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa y Somos-Barrios de Pie). Se trató de una manifestación convocada por el impacto del “avance de la inflación” y de “repudio a los formadores de precios que afectan la mesa de los argentinos”, en la que distintas organizaciones marcharon desde el Obelisco hasta la sede de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), junto con la CGT y CTA. En esta oportunidad, los dirigentes de los movimientos sociales dejaron en claro que el reclamo no era en contra del gobierno, sino “contra los empresarios que remarcan precios y especulan”. Asimismo, se trató de una serie de protestas realizadas en distintas provincias del país.

En el caso del episodio de movilización en abril de 2023⁵, se trató de la segunda marcha general que la organización que conduce Emilio Pérsico llevó adelante desde que el Frente de Todos asumió el poder. En esta oportunidad, los reclamos se dirigieron de manera más nítida al Ministerio de Desarrollo Social y tuvieron como eje demandas en torno al Potenciar Trabajo, luego de una reestructuración del programa y la dada de baja de algunos beneficiarios. Sin embargo, la consigna se formuló como una crítica al organismo financiero internacional, el FMI: “Basta de ajuste del FMI”, aduciendo que la política de ajuste social responde a las metas impuestas en el acuerdo por el FMI.

⁴ <https://www.pagina12.com.ar/416828-los-movimientos-sociales-marcharon-contralos-formadores-de->

⁵ https://www.eldiarioar.com/politica/tension-base-oficialismo-evita-moviliza-desarrollo-social-reclama-gobierno-ajuste-fmi_1_10111483.html

De esta manera, observamos que algunas de las principales problemáticas (inflación, política económica dependiente del cumplimiento de metas del FMI), están dirigidas contra los formadores de precios en el primer caso, y contra el FMI en segundo término, evitando referirse de manera explícita al gobierno más allá de que condenen su política.

2.2.2 Corriente Clasista y Combativa (CCC)

Para abordar el proceso de construcción del adversario en el caso de la CCC, debemos partir de las corrientes político-ideológicas en las que se inscribe, que son el clasismo y el sindicalismo revolucionario. Considerando la lucha de clases como punto de partida es que su orientación antagónica es de condena hacia el sistema capitalista en general. En este marco, todos los actores que bregan por la continuidad del sistema -sean políticos o económicos- son actuales o potenciales adversarios.

Es por ello que a pesar de que como organización se encuentran alineados políticamente al Frente de Todos, en tanto tienen dos diputados que integran el bloque legislativo del FdT y unos pocos integrantes de la organización se encuentran trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los gobiernos siempre serán considerados posibles adversarios cuando se ejercen en el marco del sistema capitalista. En relación a los recursos que se obtienen gracias a la política social, Delmonte señala: “El criterio que tenemos es que lo conseguido a través de la política asistencial es para fortalecer la lucha, no para adormecer. Las armas que conseguimos del enemigo las utilizamos contra el enemigo”.

De este modo, mientras no exista un gobierno que llegue al poder a través de la lucha popular, los distintos gobiernos -independientemente de su signo político- abogarán por mantener el orden y emplearán la política social para evitar el cambio. En efecto, en palabras del dirigente, esto fue lo que sucedió en la etapa de gobiernos kirchneristas, que trató de “domesticar al movimiento piquetero”.

En relación al periodo que va de 2019 a 2023, podemos ver que a través de las operaciones discursivas de construcción del adversario el FMI ha sido identificado como tal desde el comienzo del gobierno del FdT. En el caso de la CCC,

la condena al FMI fue radical e implicó la realización de marchas en distintos puntos del país, entre los que se encuentra la ciudad de Rosario, en el marco del acuerdo con el organismo internacional alcanzado por la gestión de Martín Guzmán en la cartera de Economía. A diferencia del Movimiento Evita, que al comienzo respaldó políticamente el acuerdo alcanzado con el organismo, la CCC levantó la consigna en distintas asambleas realizadas en todo el país en noviembre de 2021: "No al FMI, la deuda es con el pueblo".

Asimismo, en el último periodo de gobierno signado por el crecimiento de la inflación, CCC identificó también como principal adversario a los grandes empresarios. Junto con el Movimiento Evita y otros movimientos sociales, marcharon en abril de 2022 contra grandes empresarios. En palabras de Juan Carlos Alderete, responsable de la CCC y diputado nacional del Frente de Todos (FdT): "Hemos denunciado a estos grandes empresarios porque son los responsables de la inflación, son los 50 principales empresarios responsables del aumento alevoso en el precio de los alimentos del pueblo argentino, los mismos empresarios que han tenido grandiosas ganancias en la pandemia, los mismos poderosos empresarios que han fugado la gaita de los argentinos con el gobierno de (Mauricio) Macri"⁶. De esta manera, se observa una construcción discursiva del adversario en la que pueden identificarse actores específicos. A su vez, esta conexión con el gobierno de Macri demuestra una continuidad en el adversario, que es siempre el mismo, y que puede aliarse con el poder político de turno. "Para nosotros --agregó el diputado del FdT-- no es solo el aumento de los alimentos, acá hay un golpe de Estado en marcha. Y ese golpe de Estado está en marcha desde la Justicia con grandes y poderosos empresarios. Son los mismos que después van a pedir una Asamblea Legislativa para voltear al gobierno nacional". Así, se trata de un entramado complejo en el que se pueden identificar actores económicos, políticos y hasta de la justicia.

Finalmente, en el último año de gestión del gobierno, el programa "Potenciar Trabajo" constituyó un nudo problemático importante en torno al cual se generaron

⁶ <https://www.tiempoar.com.ar/economia/contra-la-inflacion-y-los-formadores-de-precios-movimientos-sociales-marcharon-a-la-copal/>

cortocircuitos con el gobierno nacional, especialmente con la cartera de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz. En el caso de la CCC, el conflicto escaló a niveles mayores que en relación al Movimiento Evita, ya que fueron acusados por la ministra de haber “presionado a beneficiarios del Potenciar Trabajo para no terminar sus estudios” (y así permanecer en las unidades de gestión que se encuentran bajo la órbita de esta organización). De esta manera, en el último tiempo en que se acentuó la crisis económica, la organización puso en tela de juicio de continuidad en el gobierno y organizó protestas que se dirigieron directamente al gobierno, al que identificó como el responsable del malestar suscitado con las distintas bajas del Potenciar y del levantamiento del secreto fiscal de los beneficiarios.

A modo de síntesis de este apartado, observamos que tanto el Movimiento Evita como la Corriente Clasista y Combativa han coincidido en este periodo de gobierno del Frente de Todos en su accionar colectivo y su identificación de los adversarios. Al hablar de organizaciones que se encuentran en mayor o en menor medida alineadas al espacio político del Frente de Todos, los adversarios más importantes se encuentran por fuera de este gobierno y son los actores que encarnan de manera más cabal al capitalismo en su fase neoliberal: el FMI y los grupos concentrados de la economía. Esto condujo a que en múltiples ocasiones confluyan en las movilizaciones y en las consignas levantadas.

Sin embargo, en el caso del Movimiento Evita existió un mayor respaldo al sector de Alberto Fernández y, en un comienzo, al acuerdo al que se llegó con el FMI. La CCC, por su parte, condenó desde el principio el acuerdo, en sintonía con otras organizaciones también alineadas al gobierno (como el Movimiento de Trabajadores Excluidos-MTE) pero aliadas al sector del kirchnerismo. Si bien se trata de posicionamientos que se inscriben en una coyuntura político-electoral determinada, podemos aventurar que responden a visiones diferentes sobre el conflicto social.

Para el Movimiento Evita, el conflicto se dirime en el marco del sistema capitalista. Como expresa un dirigente, “La economía popular no es una economía

que está fuera del sistema capitalista, ya que no existe otro sistema que no sea capitalista, entonces obviamente tiene que convivir con las reglas del capitalismo, lo que pasa es que el capitalismo o la economía de mercado, pone el eje central en el capital, no en la fuerza de trabajo. Hoy la riqueza no tiene que ver con la producción sino con la reproducción de las finanzas, por lo que quedan afuera del sistema muchísimos trabajadores”. De este modo, se trata de condenar y combatir aquellas lógicas del sistema que resultan en exclusión y en pobreza de amplios sectores de la población. Estas lógicas pueden estar representadas en actores económicos -como el FMI luego de que se comenzaron a implementar ajustes en la política social y algunos grandes empresarios-, y circunstancialmente en algún gobierno de signo “antipopular”.

En el caso de la CCC, el conflicto social es, principalmente, un conflicto de clases, por lo que su denuncia se dirige al capitalismo en general. De este modo, la identificación de los adversarios se sitúa en los distintos actores políticos y económicos del sistema, y su orientación antagónica hacia aquellos resulta más confrontativa. De hecho, la CCC permaneció como organización opositora a las distintas gestiones del periodo comprendido entre 2003 y 2015 por considerar que la política adoptada se trataba de concesiones para desmovilizar al movimiento piquetero.

Estas diferencias, como observamos, pueden diluirse cuando ambas organizaciones convergen en las estrategias de movilización e identifican un enemigo común. Esta identificación de un enemigo común permite, por un lado, la posibilidad de construir un “nosotros” más amplio, por fuera de las lógicas sectoriales de cada organización, y por otro lado permite exhibir mayor poder de movilización y de convocatoria popular. Así sucedió en el año 2016, cuando luego de la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo desde la Iglesia de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo quedó constituido el “tridente de San Cayetano”⁷,

⁷ Como expresa González (2022; 2), “la movilización de 2016 involucró diversos aspectos de la realidad argentina: la religiosidad popular, la lucha gremial, la situación socioeconómica, la cultura popular y la visibilidad de la economía popular en la escena política del país”. Cabe destacar, en esta dirección, el componente fuertemente religioso que nutre especialmente la identidad de las organizaciones sociales que integran la “economía popular”.

conformado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), luego devenida en Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el año 2019. La confluencia de estas organizaciones resultó en la realización conjunta de distintas marchas y ollas populares durante el gobierno de Mauricio Macri, y luego la alineación con el gobierno del Frente de Todos, así como también la organización de movilizaciones en el periodo de esta gestión.

2.3 Hacia dónde vamos

Como observamos en las conceptualizaciones del enfoque de los nuevos movimientos sociales, estos poseen la característica distintiva de situarse en el ámbito de la reproducción cultural y disputar el sentido histórico de una sociedad. De este modo, los movimientos sociales libran una batalla que no solo se produce en el ámbito de las reivindicaciones concretas, sino también en el de la experiencia histórica de una sociedad. Nos referimos, entonces, al nivel de la acción social en el que las organizaciones ponen en juego su proyecto de sociedad en la misma medida en que cuestionan la organización social vigente.

En el caso de las organizaciones que analizamos, resulta conveniente señalar que esta dimensión de la historicidad que autores como Touraine y Melucci consideran condición imprescindible de los movimientos sociales, se pone en juego de manera constante con lo “urgente”. Es decir, tal como señala Rossi (2017) retomando a Merklen, existe una articulación compleja entre la “urgencia” y el “proyecto”. En un contexto de deterioro de las condiciones sociales y económicas, los movimientos sociales se organizan para lograr reivindicaciones concretas y mejorar su posición en términos político-institucionales con el objetivo más inmediato de la supervivencia de sus integrantes y, en simultáneo, procuran no perder de vista su razón de ser, que es la de lograr transformaciones profundas - dentro o fuera- del sistema. Por ello es que su accionar colectivo se inscribe en el marco de esta tensión.

2.3.1 Movimiento Evita: hacia una economía popular

Los dirigentes del Movimiento Evita parten de una lectura crítica sobre el sistema económico capitalista, que es la que opera como punto de partida para pensar horizontes de acción y de transformación.

De acuerdo a Berra, “El sistema capitalista o el capitalismo clásico producía a partir de bienes y servicios. Con la irrupción del neoliberalismo y el capitalismo financiero, se cambian las reglas. Entonces, hoy la riqueza no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con la reproducción de las finanzas. Hoy te conviene más poner el dinero en un plazo fijo que abrir una fábrica, lo cual implica que quedan fuera del sistema muchísimos trabajadores”.

Asimismo, en relación al escenario nacional, el año 1973 opera como año bisagra en el discurso de algunos dirigentes sociales, ya que en este año se habría dejado de crear empleo formal en la Argentina. De este modo, las consecuencias del capitalismo financiero internacional -entre las que se encuentra la imposibilidad para muchos sectores de la población ingresar al empleo formal- se habrían comenzado a manifestar a nivel nacional en la década de los setenta. Por las dinámicas que adquirió el capitalismo global, resulta imposible en términos de estos dirigentes volver a una sociedad de pleno empleo. De acuerdo a uno de ellos, “el problema de la dirigencia política en general es que sigue pensando en que es posible volver a una sociedad de pleno empleo, cuando el capitalismo cada vez es más injusto, cada vez se concentra más y expulsa más”.

En el marco de esta significación sobre el pasado que se extiende hasta el presente, el concepto de economía popular cobra protagonismo. En palabras de Berra, “A toda esa masa de trabajadores que fueron expulsados del sistema de trabajo formal no les quedó otra que inventarse un trabajo, buscar la manera de sobrevivir. Y ahí nace la economía popular, que es una economía diferente porque no está vinculada a la economía de mercado ni vinculada a la superproducción, sino que es una economía en la que se privilegia el trabajo y no el capital”. Siguiendo con la caracterización que realiza de la economía popular, “las relaciones que se dan en el marco de la economía popular no son las relaciones tradicionales que se dan en el marco de la economía de mercado o de la economía de una empresa.

Hay lazos de solidaridad, se privilegia el trabajo por sobre la tecnología. Entonces eso de alguna manera genera una contradicción con lo que es el sistema”⁸.

Tal como señalan los dirigentes entrevistados, “no se trata de una economía que está fuera del sistema capitalista porque no existe otro sistema que no sea capitalista”, por lo cual debe “(...) convivir con las reglas del capitalismo, pero poniendo el eje central en la fuerza de trabajo y no en el capital”. Profundizando en esta apreciación, otro dirigente aportó que “la economía popular forma parte del sistema económico capitalista, es una parte de él. No es lo que sobra, sino una parte de la economía porque mueve y porque genera riquezas”. Así, el trabajo realizado por quienes integran la economía popular es un trabajo que el mercado no reconoce ni visibiliza, pero que aporta el valor suficiente como para ser reconocido. Se trataría, en este marco, de “darle derechos a esos trabajadores para que puedan desarrollarse en el marco de la economía popular y así puedan tener una vida digna como cualquier trabajador”. Esto implicaría generar posibilidades de crédito no bancario, un monotributo productivo a partir del que se pueda tener una perspectiva de jubilación y de Obra Social.

De este modo, la economía popular no se presenta solamente como el universo de posibilidades concretas de quienes no pueden ingresar al mercado laboral; se muestra como un horizonte deseable, cuyo sistema carece de los males del capitalismo en su forma actual y, por el contrario, exhibe las virtudes de la solidaridad social y del asociativismo. Entonces, la economía popular realmente existente, aquella que consiste más en estrategias de supervivencia que en cooperativas o emprendimientos exitosos, tensiona con el proyecto y las aspiraciones de una economía popular que tiene como fin último convertir a todos los trabajadores precarizados en trabajadores con derechos, en el marco de una economía que, aunque capitalista, también solidaria y humanista.

⁸ Resulta interesante explorar las raíces católicas de la economía social, y su afinidad con varios preceptos de la teología de la liberación o del pueblo, que pondera a los pobres como agentes del cambio, ya no desde la lucha de clases sino desde la identidad cultural y la solidaridad. La presencia del Papa Francisco I ha sido un hito clave en el apuntalamiento de la economía social, quien ha acompañado distintos experimentos de economía popular de la región y ve en él un modelo universal de inclusión para la masa marginal. Al respecto, puede consultarse a Galliano (2020), en el capítulo IV “Economía Social”.

2.3.2 Corriente Clasista y Combativa (CCC): hacia la unidad de la clase obrera

Como señalamos anteriormente, la dirigencia de la CCC parte de una condena general al capitalismo como sistema, y aboga por la unidad de la clase trabajadora que, de acuerdo a la lógica que estructura la organización, se encuentra representada en las tres vertientes de trabajadores desocupados, ocupados y jubilados. Sin embargo, la vertiente que mayor importancia detenta dentro de la CCC en términos de composición de la organización y de capacidad de convocatoria es la de los desocupados.

El horizonte de reivindicaciones que se abre con este punto de partida refiere, en primer lugar, a la lucha porque los trabajadores desocupados obtengan un trabajo formal lo más parecido posible al trabajo registrado, en el marco de un “mercado laboral restringido, muy competitivo, con una franja de la sociedad que jamás va a entrar en un trabajo formal presentando un curriculum”, como señaló un dirigente. En esta línea, sale a marcar las diferencias con respecto a otras organizaciones congregadas en la UTEP: “Nosotros no compartimos idea de que la economía popular es la economía del futuro, sino que luchamos para que la gente esté en relación de dependencia con todas las leyes, y a lo sumo lucharemos para que alguna vez haya socialismo. Pero no pensamos que el cuentapropismo sea la mejor opción, cuando además tenés que competir con toda la mercancía china. Lo aceptamos, son trabajadores y es un posicionamiento correcto frente al que te dice planero o vago, pero no pensamos que esa condición es la mejor para la gente”.

En simultáneo, el horizonte no sólo es social y económico sino también político: que la clase obrera incida en la política -en sintonía con el planteo de Salamanca de la necesidad de que la clase obrera tome posicionamientos políticos- y que, cuando tenga las condiciones, pelee por el poder político. Como expresa un dirigente, “Pelemos para que la clase obrera como clase incida en la política, y que cuando tenga las condiciones pelee por el poder político. En la línea de la masa, no en una cosa de cuadros dirigentes selectos, sino con protagonismo de los propios compañeros. Hay que pelear para que se vayan apropiando de esas ideas.

Trabajamos para una unidad popular, que todo el movimiento popular pueda dar una salida en favor del pueblo". De hecho, el año 2001 significó, en términos de Delmonte, una experiencia muy avanzada de lucha popular, que creó condiciones propicias para que pudiera asumir "un gobierno del pueblo".

3. Trabajadores: entre los desocupados y los de la economía popular

A partir de lo desarrollado en este capítulo, podemos realizar algunas apreciaciones sobre la construcción identitaria de las dos organizaciones. En primer lugar, observamos que en ambos casos se pone en juego la tensión señalada entre "urgencia" y "proyecto", y que dichos movimientos sociales operan en distintos niveles de la acción social.

En el caso de la CCC, actualmente hay un nivel de reivindicación muy concreto que tiene que ver con el tema alimentario. En este sentido, un dirigente social señala: "Estamos peleando a morir una ayuda alimentaria importante para tener distribución de alimentos para dar a los grupos. Un barrio que se suma y está dispuesto a cocinar -con lo que el gobierno nos pueda proveer al menos unos días al mes- significa un cambio grande que permite seguir expandiéndose. Marca una diferencia, aunque hayan cortado la canilla de los planes, de cerrar la inscripción (con decreto presidencial)". Estas reivindicaciones concretas, entonces, responden a un contexto de necesidad y en la misma medida contribuyen a la organización a consolidar su presencia en distintos barrios de los centros urbanos. Sin embargo, la organización no se agota en estas reivindicaciones y su accionar colectivo se comprende, también, a partir de su trayectoria y de su cultura política. En efecto, el hecho de que organicen su accionar colectivo mayormente en dirección a reivindicaciones concretas y no a la conquista de espacios político-institucionales responde a su reticencia a ser parte de gobiernos que, independientemente de su signo político y del mayor nivel de concesiones que puedan otorgar a las organizaciones, son parte de un sistema que se tiene que combatir.

En el caso del Movimiento Evita, observamos que su accionar colectivo está dirigido, principalmente, a fortalecer su posicionamiento y ganar relevancia en el seno mismo del gobierno, desde donde se pueden impulsar mejoras radicales para los trabajadores de la economía popular. El Estado, incluso independientemente del gobierno de turno, es un terreno en el que disputar espacios de la política. En palabras de uno de sus dirigentes, “es gracias a una batalla librada dentro y fuera del Estado que los gobiernos ya no pueden evitar que las organizaciones sociales tomen decisiones sobre las mismas organizaciones, que antes sólo servían para llenar actos y plazas. Lograron conquistar, poder decidir cómo quieren organizar sus barrios, sus cooperativas de trabajo, o qué es lo que quieren producir en los talleres que antes había capacitaciones diseñadas por funcionarios”. Por ello es que, a diferencia de la CCC, la autonomía respecto a la política sí puede darse siendo parte de un gobierno.

Finalmente, existe una diferencia sustancial en lo que refiere a las dos identidades políticas en cuestión, que tiene que ver con la manera en que se definen en relación al trabajo. Aunque prevalece la identidad de “trabajador” y en términos generales ambas organizaciones representan a aquellas franjas de la población que están excluidas o deficientemente integradas al mercado laboral, se vislumbran diferencias significativas en la construcción identitaria que se hace de los trabajadores en uno y otro caso.

Con respecto al Movimiento Evita, su proyecto de “economía popular” implica también la creación de un nuevo sujeto social y político, el de los **trabajadores de la economía popular**. La economía popular no sólo estaría presente en distintos emprendimientos productivos o proyectos socio comunitarios, sino también en todos aquellos “trabajadores sin patrón”. Por ello, se trata de una definición aún en construcción y en disputa. En cualquier caso, el Movimiento Evita busca representar a una categoría social que no preexiste a su construcción identitaria, que está todavía abierta. Una categoría social que también sería el sujeto de su proyecto de sociedad. Tal como expresa un dirigente, “En este momento de la historia, la herramienta UTEP es la herramienta de los trabajadores para

conseguir derechos, así como en otro momento lo fueron la CGT, la CTA o los MTD (movimientos de trabajadores desocupados).

En el caso de la CCC, el universo a representar es el de los **trabajadores desocupados**. En este sentido, la identificación de “desocupado” implica una oposición al “estar ocupado”. Se trata, entonces, de una identificación que no es propositiva y que resalta el carácter nulo o deficiente de su integración al mundo del trabajo. En este sentido, cobra relevancia la definición proporcionada por un referente de la CCC, quien define al desocupado como aquel que no tiene trabajo formal pero desea tenerlo. Aunque se encuentre realizando una estrategia de supervivencia, este trabajador no está “ocupado”. Entonces, no se trataría de poner en valor las actividades y trabajos que realizan en el marco del “cuentapropismo” o la supervivencia (en clara referencia a la economía popular), sino de “luchar para que toda esta gran masa de desocupados esté en relación de dependencia con todas las leyes”, en palabras del dirigente. Entonces, en términos ontológicos, no refieren a un sujeto social y político propio de esta época (“trabajadores de la economía popular”), sino al sujeto clásico representado en las corrientes del clasismo y el sindicalismo combativo: la clase obrera que, hace tiempo, no tiene donde trabajar y devino en una gran masa de desocupados.

CAPÍTULO III

1. Política social: desbordando sus límites

La política social se ha erigido, en las últimas décadas, en un campo de interacciones complejo y conflictivo entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado. Desde los albores del movimiento piquetero, la política social fue el área de competencia estatal desde la cual los distintos gobiernos han proporcionado respuestas al conflicto social y desde la que, en términos generales, se ha intentado “(...) gestionar el desenganche entre empleo formal y protección social”. (Soldano y Andrenacci; 2005; 22). Por el lado del movimiento piquetero y las distintas organizaciones sociales, la política social –encarnada institucionalmente en la Secretaría y luego Ministerio de Desarrollo Social- fue el ámbito por excelencia al cual exigir distintos tipos de acciones y respuestas frente a las problemáticas de la desocupación, lo alimentario, etc, así como también un espacio de disputa para conquistar espacios político-institucionales y así consolidar sus organizaciones a partir de los beneficios obtenidos.

A través de la política social, el Estado no sólo procesa los conflictos, sino que además les da un marco interpretativo, así como indefectiblemente define de algún modo a los sectores excluidos del mundo del trabajo que se procura integrar (Natalucci; 2012). Así, reflexionar sobre la política social implica no sólo considerar la intervención estatal, sino también -y especialmente en nuestro trabajo- el reconocimiento del modo en que las distintas organizaciones se posicionan frente a la política social y frente a las definiciones que, aunque implícitas, subyacen a la política social en tanto práctica gubernamental.

Durante el periodo de gobierno del Frente de Todos, observamos que el “Potenciar Trabajo” se ha constituido en un campo de interacciones conflictivas entre las organizaciones y el Estado, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social. En efecto, las protestas del último año de gestión protagonizadas por el Movimiento Evita y la CCC han sido en torno a las bajas del programa, al levantamiento del secreto fiscal de sus beneficiarios, entre otros motivos. Sin embargo, no debe perderse de vista que el posicionamiento frente al Potenciar

Trabajo se inscribe en una postura más general que tiene cada organización con respecto a la política social.

1.1 Movimiento Evita: despegar de la política social, aterrizar en la política laboral

Los referentes del Movimiento Evita comparten una mirada crítica acerca del “Potenciar Trabajo” (PT), que es el programa emblema de la política pública dirigida a promover la economía popular a través de la “creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas”. Dicho programa se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Economía Social de dicho ministerio.

El Potenciar resulta de la unificación de los programas anteriores “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”. El salario social complementario es una de las banderas que levantaron distintas organizaciones sociales en sus movilizaciones en el año 2016, durante la gestión de Cambiemos. En este marco es que un dirigente esboza su crítica al programa: “Se vuelve un poco atrás con esto porque se vuelve a la idea de que el Potenciar Trabajo no es un salario complementario para los trabajadores, sino que termina siendo utilizado como un plan social más. Creo que por una incapacidad de la clase política, de la dirigencia política, de poder entender que el salario social complementario no era un plan social, sino un complemento salarial para los trabajadores de la economía popular. Yo creo que el Estado al no poder llegar con este complemento salarial a todo el universo de trabajadores de la economía popular, entonces lo terminó usando como un plan social y eso de alguna manera desvirtuó un montón de cosas porque no era la idea original”.

Otro referente del Movimiento Evita, director de un polo productivo de cooperativas de la ciudad de Rosario, comparte su mirada crítica respecto al programa y afirma: “el Potenciar Trabajo ayuda, pero sigue siendo asistencialismo porque sigue estando en Desarrollo Social. Al estar en Desarrollo Social no puede pensarse como una política que no sea de asistencia social”. Sin embargo, sostiene que no deja de ser una ayuda importante en la medida en que es un

acompañamiento a los procesos de organización de la economía popular, que además aporta herramientas de trabajo entre otros recursos y permite, de este modo, que la economía popular “(...) no caiga tanto en la informalidad y tienda hacia el cooperativismo y la institucionalización. Es el piso que permite organizar los espacios productivos”. De este modo, si bien lo define como un plan social, reconoce que, acompañado de otros recursos como herramientas de trabajo, educación financiera, etc, el Potenciar Trabajo apuntala a la economía popular.

Esta lectura se inscribe en una crítica más general referida al abordaje gubernamental que se hace de la economía popular, confinada a los organigramas y esquemas de Desarrollo Social y, por tanto, de la política de asistencia social. Como afirma un referente social del Evita: “Si el Potenciar estuviese en el Ministerio de la Producción, no sería concebido como plan social porque nadie le dice plan social a lo que pertenece al Ministerio de la Producción”. En esta línea, también, puede leerse una demanda del Movimiento Evita reivindicada desde 2015 y levantada durante la primera parte de la gestión del Frente de Todos, que tiene que ver con la creación de un ministerio de economía popular que reúna todas las áreas del Estado vinculadas con el mundo de los trabajadores informales.

Resulta conveniente rescatar el posicionamiento del Movimiento Evita en relación a una temática que permeó el debate público que es la del Salario Básico Universal (SBU). Se trata de una propuesta levantada por el Frente Patria Grande y su dirigente más conocido, Juan Grabois, que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En efecto, en lugar de haber apoyado una propuesta destinada al universo de trabajadores precarizados, un dirigente social del Evita sostiene “Hay que diferenciar: el salario básico universal es una política universal, digamos un estilo AUH. Nosotros lo que buscamos, que es independiente de eso, es consolidar el trabajo, o sea, generar los derechos para los trabajadores que no tienen derecho. Generar políticas universales está bien en el marco de una política de asistencia a los sectores que lo necesitan. Ahora, de ninguna manera eso se puede oponer a la organización popular, porque si no estamos desorganizando al pueblo en lugar de organizarlo, estamos haciendo la política al revés”. Asimismo, otro dirigente afirma que “(...) es como la tarjeta

alimentar. Es transferencia de recursos que se licua con la inflación y con los mismos monopolios de siempre. Es volver a la imagen del Estado asistiendo sin ningún proceso de organización en el medio”. De esta manera, observamos la distancia que se marca con respecto a una propuesta de política social que, incluso, proviene de una organización aliada y considerada parte del movimiento de la economía popular.

A modo de síntesis, diremos que el encasillamiento de la economía popular en Desarrollo Social colisiona con su reivindicación identitaria, que es la de definirse como trabajadores de la economía popular y, como tales, como un sector gremial con demandas específicas.

1.2 Corriente Clasista y Combativa: política social, asistencialismo a cuentagotas

La mirada crítica respecto de la política social es también compartida por dirigentes de la CCC, aunque desde una perspectiva distinta. Esta se encuentra en el contexto de una crítica más generalizada hacia el asistencialismo y su impacto sobre la movilización -o desmovilización- popular. De acuerdo a un dirigente social, “no estamos de acuerdo con el asistencialismo que lo que busca es adormecer y calmar la necesidad, pero para que no haya cambio. Eso es lo que hace el Estado con los ministerios de desarrollo social. Mantener las cosas calmas para no joder el sistema”.

En el marco de la definición que proporciona de la política social como un “asistencialismo a cuentagotas”, esboza su perspectiva acerca del trabajo. “Nosotros luchamos por trabajo formal, no por planes. En todas las propuestas es que el Estado dé un plan, y el trabajo formal llegaría si nos metemos en el mercado laboral. Un mercado laboral que es restringido, muy competitivo, en el marco del cual hay una franja de la sociedad que jamás va a entrar en un trabajo formal presentando un curriculum, es decir si no hay una intervención muy fuerte del Estado para generar trabajo formal”. De acuerdo a dos referentes entrevistados de la organización, el Potenciar Trabajo se inscribe en el paradigma del asistencialismo social, y promueve la creación de trabajos precarios y una mano de obra que no

tiene dirección y a la que nadie controla. Un dirigente expresa: “Con el Potenciar, lo que te dicen es ‘tomá, trabajá en lo que quieras, nadie te controla’, pero la gente cuando se tiene que comprar herramientas compran las escobas de plástico, pala y bolsas y van limpiando basurales de los barrios. Ayuda mucho pero es una mano de obra que no tiene dirección. A esa mano de obra hay que capacitarla en oficios simples, no de gran complejidad, pero que la gente pueda hacer, como por ejemplo la construcción”.

En esta dirección, plantea su propuesta sobre la creación de una empresa pública que sirva para generar empleo formal y que apunte a la inclusión social: “Que se generen empresas estatales en todos lados con fuerte inversión del Estado, incluso que la administración y la dirección técnica la tenga el Estado, pero con control de otros actores como iglesias para mayor transparencia. Y con un abordaje integral, que sirva para que por ejemplo jóvenes tengan su primer empleo. Esa es la propuesta nuestra en cuanto a laburo formal. Esto queremos. Nos ponen a barrer la calle; lo hacemos. Pero nos parece que es un desperdicio semejante masa de dinero... además de que la gente tiene que ganar más”.

En primer lugar, podemos decir que esta postura sobre el Potenciar Trabajo se vincula a su posicionamiento crítico respecto a la idea de la economía popular, a la cual conciben como un modelo que solo tiene para ofrecer trabajo precario, y que actualmente se expresa en “estrategias de supervivencia y cuentapropismo”.

Finalmente se observa que, de acuerdo a los entrevistados, el Potenciar Trabajo no deja de ser una “ayuda” para los sectores en estado de mayor vulnerabilidad, que además garantiza a las organizaciones recursos presupuestarios y la posibilidad de gestionar sus propios proyectos socio-comunitarios y productivos (denominadas “unidades de gestión” en la resolución de creación del programa). Por ello es que pese a sus concepciones en torno a la política social en general y al programa específico en particular, el Potenciar ha sido objeto de disputa importante de las organizaciones con el gobierno del Frente de Todos.

1.3 Ni planeros, ni subsidiados, ni piqueteros

Luego de reconstruir las percepciones y miradas que tienen los dirigentes de las dos organizaciones en torno a la política social, observamos que en ambos casos se plantea una crítica general hacia el carácter asistencialista que rige la política social y hacia distintos aspectos del Potenciar Trabajo.

En el caso del Movimiento Evita, el problema reside fundamentalmente en que el encasillamiento de la problemática laboral de los sectores más pobres en el Ministerio de Desarrollo Social define a quienes participan de distintos programas de cooperativas de trabajo como aquello que se oponen a ser: en lugar de ser identificados como trabajadores de la economía popular, son identificados, en la lógica gubernamental, como beneficiarios de un plan social.

En el caso de la Corriente Clasista y Combativa, el mayor cuestionamiento hacia la política social reside en su carácter desmovilizante. Como “asistencialismo a cuentagotas”, la política social intenta evitar la conflictividad política y social y, por ello, constituye un impedimento para organizar y movilizar el descontento.

Además, aunque desde distintas perspectivas y con distintas intensidades, el Potenciar Trabajo ha sido blanco de algunos cuestionamientos por parte de los informantes clave. En primer lugar, para los dirigentes del Movimiento Evita, el problema que le subyace es su gestión y administración en los esquemas institucionales de desarrollo social, que además hacen que la noción de “salario social complementario” (como prestación percibida a cambio de una contraprestación laboral, comunitaria o educativa) se diluya frente a la noción de “plan social”. En segundo lugar, considerando lo expresado por sus dirigentes, la realidad de la economía popular es mucho más amplia que la que este programa logra abarcar. Como expresa un referente del movimiento, “Aunque lo consideremos plan social, sigue siendo un 0.05% del presupuesto; es algo mínimo. Hay aproximadamente nueve millones de trabajadores en la economía popular y al Potenciar Trabajo lo cobran un millón y pico de personas”. De esta forma, no se trata sólo del programa en particular, sino de una disputa en torno al alcance y a la magnitud de lo que se considera como universo de la economía popular; disputa que sigue abierta.

Respecto a la CCC, el cuestionamiento sobre el Potenciar Trabajo se orienta directamente al corazón del programa, y que en términos normativos es la formación de cooperativas de trabajo y la promoción de la economía popular. Independientemente de si se encuentra en la órbita de desarrollo social, de producción o de trabajo, el principal inconveniente de acuerdo a los entrevistados es que este tipo de políticas promueve la creación de trabajos precarios, que lejos están de los trabajos formales a los que la CCC aspira. En esta tesitura, y retomando lo mencionado en otras partes del actual trabajo, este programa no cambia la condición de quienes lo perciben, en tanto siguen siendo trabajadores desocupados que apenas alcanzan un ingreso de subsistencia a cambio de una contraprestación.

A modo de conclusión de esta sección, diremos que la política social, en tanto modalidad de intervención estatal, inevitablemente define de algún u otro modo a quienes forman parte del universo de excluidos del mundo del trabajo: o bien confirmando su posición como beneficiarios o bien reconociendo sus capacidades y competencias. (Natalucci; 2011; 4). De este modo, construye el tipo de sujeto destinatario de su política social. Es en este marco que debe reconocerse la acción de los diversos actores y las estrategias que ponen en juego para evitar, en muchas ocasiones, ser encasillados en los marcos propuestos por las lógicas político-gubernamentales subyacentes a la política social. Por ello es que la identidad de estas organizaciones sociales es también una afirmación de aquello que *no son* o que *no quieren ser*. Ni planeros, ni subsidiarios, ni piqueteros: trabajadores.

2. Organizaciones sociales en el gobierno: en los márgenes, del lado de adentro

Como observamos previamente, una dimensión importante para el estudio de las identidades políticas del arco piquetero es su posicionamiento respecto a la política social. Este elemento se inscribe en un posicionamiento más general de ellas respecto del gobierno y que implica explorar en su relación con este.

En efecto, la relación que han establecido las distintas organizaciones con el Estado y los gobiernos de turno constituye uno de los clivajes más importante dentro

del movimiento de desocupados. Esta dimensión incide de manera significativa en el proceso de construcción identitario y político de las organizaciones. Como señalan Kaese y Wolff (2016; 50), “la principal línea política que divide los movimientos de desempleados ha sido su relación con el Estado, con un grupo de organizaciones entrando en lo que Federico Rossi (2017; 124) ha llamado ‘acuerdos para la sostenibilidad de la gobernabilidad’, y un segundo grupo que rechaza tales acuerdos”.

En sintonía con esto, Iglesias (2012; 6) refiere a dos modos de construcción política del conjunto de las organizaciones piqueteras durante el último ciclo de gobiernos kirchneristas. Por un lado, la que apuesta a la construcción de un vínculo duradero con el kirchnerismo y encuentra en la gestión de programas y ocupación de cargos institucionales una base de proyección y acumulación de poder político. Por otro lado, aquella que remite a la estrategia de confrontación política con el gobierno, haciendo de la protesta social su principal arma. Los casos del Movimiento Evita y de la CCC -respectivamente- son dos ejemplos paradigmáticos de ambos tipos de construcción política. Sin embargo, en el periodo de análisis seleccionado, la CCC integra el conjunto de organizaciones sociales que, a grandes rasgos, ha apoyado al Frente de Todos en el gobierno y ha integrado una banca del bloque de diputados.

Como mencionamos previamente, se trata de organizaciones que provienen de tradiciones políticas diferentes y que, desde el mismo momento de su gestación, han construido trayectorias muy distintas. Mientras que el Movimiento Evita se alineó con los gobiernos kirchneristas en el periodo de 2003 a 2015, la CCC se posicionó como organización social opositora a las sucesivas gestiones kirchneristas del periodo referido, que recurrió a la protesta como principal herramienta de confrontación.

Sin embargo, sus trayectorias convergieron en el año 2016 en el marco de la gran movilización popular de San Cayetano que levantó las consignas de “paz, pan, tierra, techo y trabajo”. Se trató de la primera marcha de los movimientos sociales en esta fecha, en la que inmensas columnas convocadas por una gran diversidad de movimientos sociales marcharon desde Liniers hasta Plaza de Mayo y

denunciaron la difícil situación económica que atravesaban los sectores más humildes de la sociedad con el gobierno de Cambiemos. Es en este acontecimiento que nació lo que pronto se le llamaría “el tridente de San Cayetano”, compuesto por la entonces CTEP (que integra al universo de organizaciones de la economía popular), Barrios de Pie y la CCC. De allí en adelante, dichas organizaciones utilizaron como estrategia la realización conjunta de movilizaciones para avanzar en la “Ley de Emergencia Social”, sancionada ese mismo año. La identificación de un adversario común, localizado en aquel momento en el gobierno de Cambiemos, al que además se le dirigieron los reclamos, permitió construir un “nosotros” colectivo entre organizaciones de trayectorias distintas que, sin perder las diferencias, las matizaron en pos de lograr objetivos comunes.

En este marco, resulta fundamental incorporar a nuestro análisis el posicionamiento de estas organizaciones ante los gobiernos y, especialmente, ante el gobierno del Frente de Todos que ambas integran. Dicha integración no deja de estar exenta de ambigüedades -sobre todo en el caso de la CCC- ni de generar tensiones hacia dentro de su construcción identitaria.

2.1 Movimiento Evita

Por su tradición nacional-popular, sus orígenes y también su proyecto de sociedad, el Movimiento Evita no considera que los gobiernos sean a priori los adversarios, sino hasta aliados necesarios en la conquista de reivindicaciones de los trabajadores de la economía popular.

Esto conduce, por ejemplo, a que hayan establecido instancias de negociación y cooperación con el gobierno de Cambiemos, pese a su diferente orientación ideológico-política, en pos de la consecución de algunas demandas específicas. Como expresa un dirigente social en relación a las políticas instrumentadas en aquel periodo de gobierno: “De alguna manera el salario social complementario era la paritaria de la economía popular, porque estaba vinculado al 50% del salario mínimo vital y móvil. Y en la Ley de Emergencia Social también se creó el Consejo de la Economía Popular, un consejo en donde el Estado y las organizaciones de la economía popular discuten la problemática y las

reivindicaciones de todo lo que tiene que ver con la economía popular, aunque nunca se puso en vigencia”.

Sin embargo, el modo que adopta su accionar colectivo varía en función del signo político del gobierno de turno. Mientras que en los gobiernos populares se apuesta a una estrategia de construcción de carácter más político, por la que se busca ganar lugares de relevancia institucional en el seno del mismo gobierno y acumular poder político, en otros gobiernos el accionar colectivo se direcciona más bien hacia la construcción social y fortalecimiento de las organizaciones, utilizando la movilización como principal instrumento de acción colectiva. Como señala uno de sus dirigentes: “En los cuatro años de Macri creo que hicimos doscientas movilizaciones; era una etapa más de resistencia, de retroceso, pero a su vez de ofensiva en lo social. Hoy estamos en una etapa quizás más política”.

Efectivamente, la gestión del Frente de Todos que asumió en el año 2019 ha sido el contexto en el que el Movimiento Evita buscó re-posicionar sus reclamos y reafirmarse identitariamente como sindicato de trabajadores de la economía popular, así como ganar mayor peso hacia dentro del peronismo en general. Esto se debe a distintos motivos, y especialmente a un contexto que fue ponderado por esta organización como favorable para el despliegue de estrategias de acumulación de poder político.

En primer lugar, las organizaciones sociales tuvieron un papel fundamental durante la pandemia del Covid-19, en tanto sus militantes debían realizar tareas socio-comunitarias en los distintos barrios de todo el país y sostener sus merenderos y comedores a los que acudían los sectores sociales de mayor vulnerabilidad, fruto de la necesidad y de la imposibilidad de salir a trabajar. En este marco en el que la necesidad de asistencia a personas en condición de informalidad y precarización escaló a niveles inusitados, la problemática de la informalidad laboral ganó terreno en la agenda pública. El Movimiento Evita junto con otras organizaciones de la UTEP, encontraron una manera de direccionar el debate hacia la economía popular. Además, la implementación del ingreso familiar de emergencia (IFE) por parte del gobierno sirvió, en palabras tanto del presidente como de diversos actores sociales, para ponerle número a una enorme cantidad de

trabajadores/as con empleos no registrados, informales o precarizados; es decir, contribuyó a dimensionar la magnitud de la informalidad en la que se encuentra un amplio sector de la población económicamente activa, que son quienes integrarían -de acuerdo a los dirigentes entrevistados del Movimiento Evita- el universo de la llamada economía popular.

Por otro lado, el Movimiento Evita sacó provecho de una división hacia dentro de las elites políticas en el poder que ha signado prácticamente todo el gobierno del Frente de Todos: la división entre el sector kirchnerista y el sector del presidente. En este sentido, observamos que se forjó una alianza estratégica en los primeros años de la gestión de Fernández por la cual dos movimientos sociales, el Evita y Somos Barrios de Pie, le dieron su respaldo a Alberto Fernández, quien encontró en dichas organizaciones un contrapeso al poder de La Cámpora y al sector del kirchnerismo en general. Tal como expresa un dirigente: “Nosotros formamos parte del gobierno de Alberto. Intentamos desde el espacio que ocupamos que se resuelvan los problemas de los trabajadores de la economía popular, y efectivamente hay algo que cambió. Lo que cambió ahora es que quizás los gobiernos -incluso el de Macri, no solo el de Alberto- tuvieron que empezar a dar concesiones a la economía popular. Hay si se quiere cierta lógica que se rompe. Con el gobierno de Macri quizás más con la intención de que no le hagan quilombo y de mantener la paz social. Quizás con el gobierno de Alberto Fernández con la intención de hacer contrapeso a La Cámpora o construir el ‘albertismo’, cosa que a nosotros nos resulta irrelevante. Pero se rompe la lógica de ‘le damos planes a las organizaciones sociales y que se vayan’”.

En este marco, podemos rastrear algunos episodios que dan cuenta de dicha alianza. Entre ellos, se encuentra el apoyo que dieron públicamente algunos referentes del Evita al acuerdo con el FMI. Este gesto significó un respaldo a la política de Alberto Fernández y a la gestión de Martín Guzmán en la cartera de economía, cuestionado por el sector del kirchnerismo. Además, debemos decir que el Movimiento Evita adoptó una postura diferente a la de sus compañeros de la UTEP, específicamente a la del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que se alineó al kirchnerismo en su rechazo a dicho acuerdo.

Asimismo, en septiembre de 2021 y luego de las elecciones legislativas en las que la fuerza política oficialista obtuvo un resultado desfavorable, el Evita y Barrios de Pie convocaron a una marcha en apoyo a Alberto Fernández, en el marco de una crisis interna hacia dentro del gobierno. Si bien el presidente pidió suspender la convocatoria, esta significó en su momento un gesto de respaldo hacia el sector de Alberto Fernández. Asimismo, en relación al Salario Básico Universal (SBU) promovido por el Juan Grabois, observamos que la postura crítica del Evita respecto a esta medida no solo tiene que ver con sus opiniones en torno a la política social en general (como mencionamos en el apartado anterior), sino también a su alineación detrás del presidente en un contexto de corridas cambiarias y cambio de ministros en la cartera de economía y en el que, de acuerdo a Pérsico, “No es momento de dar la discusión por el Salario Básico Universal”. De esta forma, los dirigentes del Evita se diferenciaron de una propuesta reivindicada por una organización afín y también reivindicada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en los términos de “ingreso básico universal”.

Como contraparte de este respaldo al presidente en los primeros años de su gestión, el Movimiento Evita también ha recibido reconocimiento del Ejecutivo y ha logrado conquistas específicas que le permitieron acrecentar su poder político dentro del frente y ocupar espacios institucionales de importancia. En primer lugar, debemos mencionar a los dirigentes que ocupan algunos cargos de relevancia institucional, entre ellos Emilio Pérsico como titular de la Secretaría de Economía Social, o Fernando “Chino” Navarro como Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

En esta línea de ganar espacios institucionales, a través de una resolución de noviembre de 2021 se le delega a la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, en manos de Pérsico, el papel de autoridad de aplicación del Programa Potenciar Trabajo en *todos* los casos, y no sólo los casos en los que las Unidades de Gestión (unidades productivas) se encontraban en la órbita de organizaciones no gubernamentales tal como lo establecía la resolución original. Podemos mencionar también el traslado de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Infraestructura al Ministerio de Desarrollo Social. Tal como

expresa un dirigente, “Lo que cambió con el gobierno de Alberto es que se les dio a las organizaciones sociales capacidad de decidir por nosotros mismos algunas cositas muy pequeñas. Como las Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Las únicas intervenciones que se hicieron en los barrios de Rosario son obras de la SISU y son hechas por las organizaciones sociales nucleadas en la economía popular”.

De este modo, tal como señala otro dirigente: “El gobierno de Alberto Fernández fue más permeable a las demandas de la economía popular. De hecho, compañeros de las organizaciones sociales son parte del gobierno en áreas que tienen que ver con la decisión de políticas. Tanto Barrios de Pie, como Movimiento Evita, como MTE y CCC, están en áreas concretas de gobierno que definían política desde el territorio y no desde una oficina en Buenos Aires. Eso sirvió mucho para lograr una mejor organización de las organizaciones y obviamente un mayor poderío de militancia. Se rompe la lógica de que las intervenciones en los barrios sean todas definidas por funcionarios de carrera, y los programas de capacitación laboral los decidan técnicos de Desarrollo Social. Las organizaciones sociales, formando parte, empiezan a poder decidir cómo quieren organizar sus barrios, sus cooperativas de trabajo, qué es lo que quieren producir en los talleres en los que antes había capacitaciones”.

Sin embargo, no debemos olvidar que durante la segunda etapa de gestión del Frente de Todos, su relación con el gobierno no estuvo exenta de contradicciones. Es que a una política económica cuestionada por el aumento de la inflación, también se le sumaron las controversias por el levantamiento fiscal de los beneficiarios del Potenciar que condujeron a que uno de los referentes más importantes del Evita, Gildo Onorato, amenace con abandonar los cargos que integrantes de la organización tienen en algunos ministerios⁹.

⁹ <https://www.pagina12.com.ar/503893-movimientos-sociales-podrian-irse-del-gobierno-enojados-con->

2.2 Corriente Clasista y Combativa

Provenientes de una tradición clasista y combativa que reivindica la lucha de clases y la unidad de la clase trabajadora, la Corriente Clasista y Combativa ha desplegado, desde sus inicios como organización, una postura confrontativa respecto a los distintos gobiernos de turno.

Durante el gobierno de Duhalde la CCC formó parte, como señala Rossi (2017), de las organizaciones que establecieron con el gobierno de Duhalde una relación basada en “acuerdos para la sostenibilidad de la gobernabilidad” junto con otras como la “Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat” (FTV), relación que se quebró antes de la finalización abrupta de su mandato en 2003. Con el gobierno de Néstor Kirchner y en el marco de una mayor integración de organizaciones del arco piquetero a la coalición de gobierno -cargos políticos y gestión de programas mediante-, la CCC definió, sin embargo, seguir una política de oposición con el gobierno. A diferencia de la FTV, por ejemplo, con la cual establecieron alianzas esporádicas y convergieron en la organización conjunta de cortes de calle y ruta y de movilizaciones, la CCC rechazó aceptar su incorporación a la base territorial de la coalición gobernante.

En el marco de su política opositora al kirchnerismo, un dirigente señala: “El kirchnerismo de alguna manera trató de domesticar al movimiento piquetero. Nosotros nunca aceptamos eso y nos quedamos siempre en la posición más contestataria. Lo del 2001 fue una experiencia muy avanzada de poder popular. Llegamos muy lejos, por lo que nuestra idea post 2001 consistió en generar condiciones para ir a otro gobierno. Pero desde arriba, la política impedía que eso suceda. Esa puja con el kirchnerismo la tuvimos. Hubo toda una batería de ofertas a los movimientos sociales y ahí fuimos agarrando la que nos convenía pero nunca dejamos de apuntar a lo que quedaba afuera de ese reparto”.

En efecto, dicho posicionamiento llevó a la CCC a coincidir con la CGT opositora y la CTA en las movilizaciones contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y a participar de las protestas de 2008 realizadas en el marco de la oposición a la resolución 125, junto con pequeños y medianos chacareros.

Su política confrontativa frente a los sucesivos gobiernos de turno continuó con el gobierno de Cambiemos, en el periodo de 2015 a 2019. La mayor diferencia de la gestión de Cambiemos con respecto a las experiencias de gobiernos anteriores reside fundamentalmente en que su accionar pudo converger con el de los movimientos sociales que antes integraron –aunque cada vez con mayores rispideces- el gobierno de Cristina Kirchner y que, en el gobierno de Mauricio Macri, pasaron a ser opositores. Tal como reza el sitio web de la Corriente Clasista y Combativa, “La existencia de un enemigo común, con el triunfo electoral de Macri en 2015, fue encontrando la unidad en lo llamados cayetanos y desde 2016 la CCC, en unidad con Los Cayetanos, conquistó con el apoyo de la CGT y la CTA la Ley de Emergencia social y el salario social complementario en diciembre del 2017. Con la lucha enfrentándolo en las calles se pudo ayudar a constituir el Frente de Todos, un amplio frente que ganó las elecciones del 2019”.

Este breve repaso del derrotero seguido por la CCC nos permite comprender mejor su actual posicionamiento ante el gobierno y las tensiones identitarias que su alineamiento con el Frente de Todos produce hacia dentro de la organización.

Pese a su alineación al Frente de Todos y a su militancia por el candidato oficialista para las elecciones presidenciales del año 2023, uno de los dirigentes más importantes de la CCC de la ciudad de Rosario señala lo siguiente: “Nosotros definimos no ser gobierno, no tenemos funcionarios nacionales de peso, tenemos metidos algunos compañeros en algunas instancias del Ministerio de Desarrollo Social por ejemplo para enterarnos qué pasa y poder fogonear que salgan algunos proyectos que se presentan. Pero no queremos que los compañeros carguen la responsabilidad política de ejecutores de la política de un gobierno que no te consulta para nada y edifica sus políticas por su cuenta y lo único que tenés que hacer es ejecutarla. No somos parte del gobierno para poder tener las manos libres para salir a luchar contra ese gobierno en las cosas que no estemos de acuerdo. El punto de referencia política nuestro es la masa que dirigimos”.

Esta negación de pertenencia al gobierno contrasta con la percepción que tienen otras organizaciones, el Movimiento Evita en este caso, respecto a la presencia de “compañeros de la CCC” en el Ministerio de Desarrollo Social y a

algunas muestras de apoyo dirigidas al gobierno del Frente de Todos por otros dirigentes relevantes de la organización, así como también contrasta con la presencia del referente de la rama de los desocupados, Juan Carlos Alderete, quien ocupa una banca en el bloque parlamentario oficialista. Se evidencia, de este modo, una pertenencia al gobierno que es conflictiva y en ocasiones ambigua, lo cual se expresa en movilizaciones populares realizadas en distintos puntos del país frente a las sedes de los ministerios nacionales, así como también en posturas explícitamente contrarias a determinadas políticas de gobierno.

En efecto, la CCC fue una de las agrupaciones que en marzo de 2022 manifestó su desacuerdo respecto al acuerdo realizado con el FMI, con movilizaciones en las calles y con sus dos representantes en diputados votando negativamente por el acuerdo. En este marco, el diputado nacional Juan Carlos Alderete expresó, en relación a las diferentes posiciones hacia dentro de los movimientos sociales aliados al gobierno, que se trata de posiciones momentáneas y de un tema coyuntural, evitando confrontar con otros movimientos sociales que respaldaron el acuerdo y preservando dicha alianza.

Otro episodio que expresó una muestra de descontento hacia el gobierno fue la mencionada marcha que realizaron en abril de 2022 junto al Evita y el MTE “contra los formadores de precios y la inflación”, marcha que el gobierno intentó -sin éxito- desactivar.

Sin embargo, el campo de mayor conflictividad entre el gobierno y la CCC fue, como señalamos previamente, el del Potenciar Trabajo. En efecto, ya hacia finales 2022 y a lo largo de 2023, se produjeron distintas movilizaciones populares en las sedes de los ministerios nacionales de Buenos Aires y el Gran Rosario, así como manifestaciones públicas en medios de comunicación realizadas por los dirigentes más conocidos de la CCC, que criticaron de manera directa a la ministra de Desarrollo Social por el levantamiento del secreto fiscal de los beneficiarios del programa y por las bajas de algunos de sus beneficiarios, y en las que reclamaron por la ampliación de nuevos planes en condiciones de deterioro del poder adquisitivo. Inclusive, en relación con el tema del levantamiento del secreto fiscal,

amagaron con irse del gobierno y con “instalarse en las calles”¹⁰, en un marco en el que el gobierno nacional se ha vuelto el principal destinatario de los reclamos y de las críticas, a diferencia de la primera etapa de su gestión.

Otro foco problemático que ha suscitado distintos episodios contenciosos organizados por la CCC en el año 2023, y cuyo epicentro es la ciudad de Rosario, gira en torno a la asistencia alimentaria a comedores y merenderos. Se trata de una toma pacífica de las instalaciones de la sede local del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en reclamo de la restitución de la asistencia alimentaria.

En síntesis, podemos decir que el posicionamiento de la CCC ante el gobierno ha sido, por un lado, de alineación al espacio político del Frente de Todos que, desde su nacimiento como frente político-electoral, alojó a movimientos sociales diversos. Por ello es que actualmente el dirigente más importante de la corriente de desocupados de la CCC integra el bloque de diputados del Frente de Todos, así como también hay referentes de la organización en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y, finalmente, un apoyo a la candidatura presidencial del frente devenido en Unión por la Patria. Sin embargo, este vínculo no ha estado exento de conflictividad y, en ocasiones, su “pertenencia” es percibida como ambigua. Por los principios identitarios y políticos de la CCC, este gobierno no puede ser considerado un gobierno de la clase obrera. Se trataría, más bien, de una herramienta político-electoral que, por el momento histórico específico, constituye un vehículo para el cumplimiento de algunas reivindicaciones y que no despliega una acción represiva como primera respuesta al conflicto social. Esto significa que las estrategias de confrontación que caracterizan la acción colectiva que esta organización ha desplegado a lo largo del tiempo persisten de manera significativa en el presente, a pesar de la alineación coyuntural con el gobierno peronista. Como expresa un dirigente: “Tuvimos que ir desarrollando una estrategia también según el momento político. Ahora los cortes los anunciamos también porque hay un status quo donde no nos reprimen. Como sabemos que no, los anunciamos y los hacemos de corta duración; que sean noticia pero que no jodan tanto”.

¹⁰ <https://www.pagina12.com.ar/503893-movimientos-sociales-podrian-irse-del-gobierno-enojados-con->

2.3 Recapitulación del apartado

Luego de indagar en el posicionamiento tanto del Movimiento Evita como de la Corriente Clasista y Combativa ante el gobierno del Frente de Todos, estamos en condiciones de hacer una recapitulación del presente apartado.

En primer lugar, las circunstancias políticas y económicas de los años previos a la gestación del Frente de Todos influyeron significativamente en los modos de construcción política de ambas organizaciones. Al respecto, el año 2016 constituye un punto de inflexión en el rumbo seguido por las organizaciones sociales que aquí analizamos. La gestión de “Cambiamos” en el nivel nacional abrió un nuevo escenario social y político que dio lugar a la convergencia de las -hasta entonces distintas- trayectorias del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa. La articulación de estrategias en un nivel interorganizacional que incluyó también a otras organizaciones sociales y sindicales, fue posible a partir de una significación común de la estructura de oportunidades políticas que se abrió con un gobierno de signo opuesto a ambas organizaciones, pero con la necesidad de hacerle concesiones a los movimientos sociales para evitar la ruptura del orden social.

En este marco, la identificación de un adversario común y la realización de un diagnóstico compartido acerca del presente y del futuro incidieron, en primer lugar, en la posibilidad de construir una alianza entre los movimientos sociales. Dicha alianza permitió articular una resistencia social masiva a la política económica del macrismo -que logró una alta visibilidad en la marcha de San Cayetano del año 2016- y también un mayor poder de movilización para obtener algunas reivindicaciones específicas, como la Ley de Emergencia Social y, en el año siguiente, el Salario Social Complementario. En este sentido, la marcha de San Cayetano “(...) operó como articuladora de la crítica hacia el gobierno de Macri y, a su vez, como multiplicadora de espacios y ámbitos de acción colectiva, así como también posicionó a estos actores en la esfera pública, la que les dio un nombre y los confirmó como un actor ineludible para el nuevo gobierno”.

Esta alianza de movimientos sociales partió de una resistencia de carácter social, no partidaria, que por lo tanto significó una superación del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo previo al gobierno de Cambiamos que había

encontrado a las organizaciones sociales en veredas opuestas en función de su pertenencia o no al kirchnerismo. Esto sirvió como trampolín para conformar la base territorial de la alianza política y electoral del Frente de Todos, integrada por actores sociales diversos.

Coincidimos con Melucci (1989) en el carácter dinámico y no-cerrado de las identidades políticas, que operan en un ámbito de oportunidades y restricciones. En este caso, su ponderación del contexto y de la estructura de oportunidades políticas condujo a la CCC, por ejemplo, a integrar un gobierno que no proviene de su misma matriz ideológico-política, y a apoyar la candidatura presidencial del ministro de economía de la gestión actual, Sergio Massa. En simultáneo, esta alineación con el gobierno ha implicado tensiones hacia dentro de su identidad política, definida en buena medida por su accionar colectivo más confrontativo respecto a los distintos gobiernos de turno y a su negación histórica a ser cooptada por estos que, como sostienen sus dirigentes, utilizan a la política social como arma de cooptación. Pese a todo esto, la CCC conservó posturas más combativas en relación a algunas políticas como el acuerdo con el FMI. Asimismo, los episodios contenciosos continuaron primando en su repertorio de acción colectiva, aunque con un discurso menos confrontativo para con el gobierno y acompañando a otros modos de acción colectiva (como los petitorios, el desempeño de funciones en algunas áreas de Desarrollo Social, entre otros).

El dilema de ocupar “los dos lados del mostrador” también ha atravesado al Movimiento Evita, aunque de un modo distinto. En efecto, lo que tensiona mayormente los principios identitarios del Evita no es su pertenencia a un gobierno con el que comparte la misma matriz político-ideológica, sino la definición de la problemática de la economía popular en términos de problemática de la política social. Por ello es que su pertenencia al gobierno y, especialmente, su apoyo al presidente Alberto Fernández, ha estado sujeta a dos elementos. En primer lugar, a las concesiones que puede hacer el gobierno en su reconocimiento como trabajadores más que como beneficiarios. Muestra de ello es su alineamiento inmediato a la candidatura de Sergio Massa luego de que anunciara la puesta en marcha del monotributo productivo para este sector de la economía. En segundo

lugar, el margen de autonomía al que puede acceder en su condición de fuerza política más que de organización social, es decir, en un nivel político-partidario. Esto puede observarse en la presentación de listas propias en algunos distritos electorales que compiten con candidaturas del mismo frente.

Como observamos, el posicionamiento de ambas organizaciones -aun con diferencias entre ellas-, ha sido de alineamiento general hacia el gobierno. De todos modos, pueden trazarse, a gruesas pinceladas, dos etapas en la gestión del Frente de Todos. Un primer momento comprendió la asunción de Alberto Fernández, la pandemia y la post-pandemia. Como expresa el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en ocasión de la entrevista realizada para el actual trabajo: “Generamos comités de crisis, donde estaban todos los gobernadores, los intendentes, los más diversos partidos políticos y los movimientos sociales -tanto aquellos que están de acuerdo con el gobierno como los que son muy críticos al gobierno-. Eran debates muy duros sobre lo que había que hacer y había mucha atención. Pero terminaba y cada uno iba a laburar a su barrio y a sostener la situación del comedor. Me tocó un momento en el que todos tiramos para adelante. Fue una situación que no es la actual. Objetivamente todos estábamos convencidos de que había que poner el cuerpo y laburar. Cada uno tenía su postura y las reuniones eran muy álgidas, pero luego cada uno salía y sabía lo que tenía que hacer que era ayudar al comedor, al merendero de su barrio bien en términos generales”. De esta forma, observamos que en un primer momento la relación entre los movimientos sociales y el gobierno fue, primordialmente, de cooperación.

Pero es hacia mediados del año 2022, en un clima de crisis política que concluye en la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que comienzan a escalar las tensiones. Si bien hubo un respaldo general a la asunción de Massa como nuevo ministro, la inflación creciente pasó a primera plana entre las preocupaciones de los movimientos sociales, que vieron el poder del salario cada vez más deteriorado. Asimismo, en el marco de un acuerdo con el FMI firmado a comienzos de 2022 que tiene entre sus metas la reducción del déficit fiscal, las organizaciones sociales volvieron a la calle y levantaron consignas en contra del ajuste del FMI (y del gobierno).

En esta oportunidad, los reclamos también se dirigieron al Estado y, especialmente, al área de Desarrollo Social por los distintos conflictos en torno al Potenciar Trabajo (la suspensión de nuevas altas en el plan y, principalmente, la baja inmediata de beneficiarios en condiciones irregulares de percibirlo con el consecuente levantamiento del secreto fiscal). Aquí se observa, por ejemplo, un enfriamiento del apoyo del Movimiento Evita al presidente y asimismo un cambio de postura respecto al FMI: mientras que a comienzos de 2022 respaldaron el acuerdo, en las últimas movilizaciones manifestaron su oposición a las políticas de ajuste que habrían sido promovidas en el marco de dicho acuerdo. Además, tal conflictividad escaló al punto de que dirigentes sociales de ambas organizaciones amenazaron con irse del gobierno.

CONSIDERACIONES FINALES

Racconto de dos trayectorias políticas

A lo largo de nuestro trabajo, y tomando como punto de partida los aportes de las perspectivas de la movilización de recursos y de los movimientos sociales especialmente, examinamos la manera en que dos dimensiones significativas de la acción colectiva, la identitaria y la política, han interactuado en la conformación de identidades políticas dentro del heterogéneo universo del movimiento piquetero.

De esta manera, caracterizamos la construcción identitaria de dos organizaciones, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, que han representado desde su nacimiento a la actualidad -tal como señalamos al comienzo- a un sector social de características similares: un sector que, por su inexistente o precaria integración al mercado laboral, no es reconocido por los actores de la política y del mercado como perteneciente al mundo del trabajo.

Luego, observamos el modo en que su identidad -nutrida de una matriz ideológico-política específica y forjada al calor de la construcción de un adversario y del espacio conflictual en el que se despliega- ha determinado el accionar colectivo y el posicionamiento de cada una de estas organizaciones respecto al gobierno y a la política gubernamental en el periodo de 2019 a 2023. Esto nos llevó a caracterizar el espacio conflictual en el que se ha emplazado su acción política y los modos en que estas organizaciones han significado el contexto social, político y económico para darle curso a tal accionar.

Como mencionamos en el desarrollo previo de nuestro trabajo, durante la sucesión de gestiones kirchneristas en el periodo de 2003 a 2015, ambas organizaciones habían elaborado lecturas distintas y tomado posicionamientos distintos respecto al gobierno de turno: integrarlo o confrontarlo.

La llegada del gobierno de Mauricio Macri en 2015, en el marco de una serie de políticas recesivas y de un discurso de deslegitimación respecto de la organización popular y los “planes sociales”, configuró un nuevo escenario para los movimientos sociales. La convergencia en distintas marchas y movilizaciones -entre

las que se destaca la de San Cayetano en el año 2016- abrieron la posibilidad de crear alianzas tácticas entre distintas organizaciones sociales para el logro de reivindicaciones puntuales. Poco a poco, y a partir de la identificación de un adversario común, estas alianzas devinieron en unidad de concepción política y organizativa. Este proceso contribuyó a soslayar diferencias y a allanar el terreno para conformar la base de movimientos sociales alineados al gobierno que asumió en el año 2019.

De este modo, arribamos al periodo seleccionado para nuestro análisis que es el de la gestión del Frente de Todos, del año 2019 a 2023. A continuación, brindaremos algunas de las conclusiones a las que arribamos.

En primer lugar, observamos que el contexto político caracterizado por fuertes divisiones internas en el partido gobernante y la necesidad de apoyo de una parte del Ejecutivo fue aprovechado positivamente por las organizaciones sociales estudiadas. Especialmente, este elemento se erigió como un determinante de peso en la influencia creciente que ganó el Movimiento Evita en el reposicionamiento de sus demandas como organización y sindicato de los trabajadores de la economía popular.

En segundo lugar, y en continuidad con lo anterior, observamos que debido a una alianza táctica y estratégica de la Corriente Clasista y Combativa con el Movimiento Evita, la identidad política de la CCC en los marcos de este gobierno se ha adaptado y acercado a la identidad política del Evita. Es decir, a pesar de evocar al sujeto de “trabajador desocupado” en su construcción identitaria y de abogar por una propuesta distinta a la del Evita, la CCC se ha plegado a demandas más propias del sujeto del “trabajador de la economía popular”. Muestra de ello es que el primer acto de apoyo por parte de todos los movimientos sociales alineados al gobierno al candidato presidencial oficialista fue en el marco del anuncio del monotributo productivo para la economía popular.

En tercer lugar, identificamos que la segunda etapa del gobierno, abierta hacia comienzos del año 2022, se caracterizó por un posicionamiento crítico de las organizaciones frente a la política social y económica, que alcanzó su punto más álgido con los ajustes producidos en el Potenciar Trabajo en el marco de la asunción

de una nueva gestión en Desarrollo Social. De este modo, concluimos en que la integración al gobierno del Movimiento Evita y la CCC ha sido especialmente conflictiva en esta segunda etapa y ha adoptado un carácter más confrontativo, expresado en las movilizaciones que ambas organizaciones llevaron adelante.

Pese a lo dicho anteriormente, ambas priorizaron la construcción social y política dentro de los marcos del Frente de Todos y también su continuidad en el frente político-electoral de Unión por la Patria. De la misma manera que durante los años de la alianza Cambiemos en el gobierno, también ahora la identificación de un adversario común encarnado en las fuerzas políticas opositoras con amplias posibilidades de ganar las elecciones, ha operado como elemento cohesionador de dichas organizaciones sociales en su alineación política y ha llevado a que pugnen por la “unidad” del espacio político en las elecciones presidenciales de este año. De esta manera, se demostró que una de las dimensiones constitutivas del proceso de identificación política, a saber, la construcción del adversario, fue determinante tanto en la disuasión de las tensiones que naturalmente genera hacia dentro de las identidades políticas su alineamiento con los gobiernos, así como también en el forjamiento y fortalecimiento de dicha alianza entre organizaciones de culturas y trayectorias políticas distintas.

La huella piquetera: una resignificación de los orígenes

En la construcción identitaria de ambas organizaciones, observamos una apuesta discursiva por superar la huella del piqueterismo y desmarcarse de una identificación que las liga al modo específico que asumió su accionar colectivo a lo largo del tiempo, especialmente en sus inicios. Esta identificación, además, estaba directamente ligada a su condición de desocupados o desempleados; condición que sobresalía por sobre la de trabajador.

Sin embargo, luego de la caracterización que realizamos sobre su proceso de construcción identitaria, observamos algunas diferencias en el modo en que se definen en tanto sujeto social y en tanto identidad política.

En el caso de la Corriente Clasista y Combativa, sus dirigentes se refirieron a la categoría de “trabajadores desocupados”, que es a su vez la rama más visible

de la organización que aloja en su seno también una rama de ocupados y otra de jubilados y pensionados. De este modo, al mismo tiempo que se definen como trabajadores, también ponen en cuestión -con la categoría de “desocupados”- su condición de falta de integración en el mercado laboral. Este elemento incide en su proyección social y política: no se trata de definir un nuevo sujeto sociopolítico, sino de *volver a ser* un trabajador ocupado. Por ello es que su horizonte reivindicativo se orienta más al reclamo para que los desocupados puedan acceder al empleo formal; un empleo que sea lo más parecido posible al trabajo asalariado clásico que esta vez el Estado tiene la obligación de garantizar.

En el caso del Movimiento Evita, observamos una reivindicación de la condición de trabajador y también de su integración en la economía popular. Se trata, entonces, de una apuesta identitaria que es propositiva y que conduce a la definición de un nuevo sujeto sociopolítico: el sujeto de la economía popular. De este modo, su horizonte reivindicativo no se orienta a una propuesta nostálgica de volver a un sujeto que es difícil de construir en las circunstancias del capitalismo actual, el del trabajador asalariado del pleno empleo, sino a fortalecer a aquel nuevo sujeto sociopolítico realmente existente y también en proceso de conformación. Así, su sentido histórico -el nivel de la historicidad- se juega en la construcción de un modelo social, económico y político que, aunque puede existir en los esquemas del sistema, posee tanto una racionalidad distinta a la economía capitalista –basada en el trabajo más que en el capital-, así como también posee la capacidad de absorber a los que están “excluidos” e inevitablemente estarán excluidos del mercado laboral formal.

Visto lo anterior, consideramos pertinente señalar que tanto la Corriente Clasista y Combativa como el Movimiento Evita compartieron lecturas similares sobre la imposibilidad del capitalismo en su estadio actual de crear empleo para las mayorías trabajadoras y, por lo tanto, de que los trabajadores en condición de informalidad, algunos de los cuales perciben un beneficio del Potenciar Trabajo, puedan en algún momento acceder a un “empleo genuino”. En el marco de este diagnóstico común, ambas organizaciones consideraron que el Estado posee un rol

fundamental: o garantizar empleo formal en empresas públicas por un lado, o fortalecer el entramado de la economía popular por el otro.

Ante una respuesta estatal impartida por el Ministerio de Desarrollo social que los encuadra en los esquemas de la política social, y ante una parte de la sociedad que los sigue definiendo a partir de su accionar contencioso pasado, estas organizaciones reafirman su identidad de trabajadores. De este modo, desplazan la identidad piquetera, de carácter antagónico y forjada al calor de las reformas acaecidas en la década de los noventa, y dan lugar al florecimiento de identidades políticas renovadas.

En un contexto global signado por dinámicas excluyentes en el mercado laboral, y un contexto regional con importantes sectores de la población en condición de pobreza y de precariedad, estas organizaciones responden de distintas formas, a veces de manera novedosa, a un interrogante que se torna crecientemente complejo: ¿qué es ser un trabajador en el siglo XXI, particularmente en América Latina donde la informalidad laboral y la exclusión constituyen un rasgo recurrente?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUYERO, J. (2002) “Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 42, Nº 166, julio-septiembre, Buenos Aires

BRUNO, D., COELHO, B., PALUMBO M. M. (2017) “Innovación organizacional e institucionalización conflictiva de las organizaciones de la economía popular. El caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)”, publicado en revista *Argumentos*, Ed. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani

DE LA GARZA TALAVERA, R. (2011) “Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional”. Revista *Estudios Políticos*, vol. 9, núm. 22, enero-abril, 2011, pp. 107-138, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México

DE SOUSA SANTOS, B. (2001) “Los nuevos movimientos sociales”, en Revista OSAL nº 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre, pp. 177-183

DINERSTEIN, A., CONTARTESE, D y DELEDICQUE, M. (2010). La ruta de los piqueteros: luchas y legados. Buenos Aires: Capital Intelectual.

FARINETTI, M. (1999) “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, en *Trabajo y Sociedad*, Vol. 1, Nº 1, junio-septiembre.

GALLIANO, A. (2020) “¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?”, 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

GARAY, C. (2017) “Los movimientos de desocupados en el Conurbano. Protesta, política social y política partidaria”, en Zarazaga, Rodrigo y Ronconi, Lucas (comps.), *Conurbano infinito. Actores políticos y sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad*. Buenos Aires: Siglo xxi Editores/Fundación osde.

GÓMEZ, M. (2009) “Las políticas de empleo como respuesta estatal a la acción colectiva de los movimientos de desocupados. Entre el clientelismo, el empowerment y la lucha política”, en Gómez, Marcelo y Astor Massetti (comps.) Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros, Buenos Aires, Nueva Trilce.

GONZÁLEZ, L. J. (2022) “Una realidad que llegó para quedarse: La CTEP y el escenario emergente a partir de la Marcha de San Cayetano (2016)”, en revista *Sociohistórica*, N° 48.

IGLESIAS, E. (2012) “Transformaciones de las identidades políticas. Origen y mutación de la Corriente Clasista y Combativa en la ciudad de Rosario (2000-2010)”, en revista *Trabajo y Sociedad*, N° 19, Santiago del Estero.

IGLESIAS, E. (2015) “Identidades políticas en el marco de la acción colectiva. Enfoque sobre la emergencia e institucionalización de la protesta piquetera en Argentina”, en revista *PostData 20*, N°1, abril / 2015- septiembre / 2015.

KAESE, F. y WOLFF, J. (2016) “Piqueteros after the Hype: Unemployed Movements in Argentina, 2008-2015”, en *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, N° 102 (2016) October, pp. 47-68

MCADAM, D., MCCARTHY, J., y ZALD, M., (1999) “Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales”, Ed. Istmo, Madrid

MELUCCI, A. (1999) “Acción colectiva, vida cotidiana y democracia”. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México.

MERKLEN, D. (2005) “Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)”, Buenos Aires, Gorla.

MERKLEN, D. (2010) “Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)”. Buenos Aires: Gorla.

MUNERA RUIZ, L. (1993) “De los movimientos sociales al movimiento popular”, en Revista “Historia Crítica”.

NATALUCCI, A. L. (2012) “Políticas sociales y disputas territoriales: El caso del programa “Argentina Trabaja”, publicado en Revista *Perspectivas de Políticas Públicas*

NATALUCCI, A. L. y PASCHKES RONIS, M. (2011). “Avatares en la implementación de políticas sociales. Concepciones y prácticas de las organizaciones sociopolíticas que participan en el programa Argentina Trabaja (2009-2010)”. Presentado en IV Encuentro Internacional de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires: Políticas Públicas y Trabajo Social, aportes para la reconstrucción de lo público (pp. 1-24). Universidad de Buenos Aires.

NATALUCCI, A. L., MORRIS, M. B. (2019) “¿Superando la fragmentación? Un análisis de las estrategias de articulación entre la CGT y la CTEP (2009-2017)”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad; Astrolabio; 23; 09-7-2019; 169-197

PEREYRA, S., PÉREZ, G. y SCHUSTER, F. (2008) “La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después del 2001”, La Plata, Al Margen.

PLEYERS, G. (2006). “En la búsqueda de actores y desafíos societales: la sociología de Alain Touraine”. En *Estudios Sociológicos*, El Colegio De México, 24(72), 733–756.

ROSSI, F. “Más allá del clientelismo: el movimiento piquetero y el Estado en la Argentina” (2017). En “Movimientos sociales en América Latina: perspectivas, tendencias y casos” (pp.212-232), Editado por: Paul D. Almeida, Allen Cordero Ulate, CLACSO

SANDOVAL, J. (2020) “El repertorio de acción política en el ciclo de movilizaciones estudiantiles chilenas”, Revista de Estudios Sociales, 72, Publicado el 01 abril 2020

SCHUSTER, F. L. (2005). "Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva". En F. L. Schuster (Ed.), *Tomar la palabra: estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina* (pp. 43-83). Buenos Aires: Prometeo Libros.

SCHUTTENBERG, M., (2021). "Posneoliberalismo y después: proyecto y sujeto de la representación en el Movimiento Evita (2005-2018)". *Enfoques*, XXXIII (1), 15-29.

SOLDANO, D. y ANDRENACCI, L. (2005) "Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino", Ed. Prometeo.

SVAMPA, M. (2005) "La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo". Buenos Aires: Taurus.

SVAMPA, M. (2008) "Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)", en *Colección Osal*, N° 24, octubre.

SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2003) "Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras", Buenos Aires, Biblos.

TARROW, S. (1997) "El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política". Ed. Alianza, Madrid.

TILLY, C. (2002) "Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña, 1758-1834". En *Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva*, editado por Mark Traugott, 17-48. Barcelona: Hacer.

TORRE, J.C (2019) "De la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor sociopolítico", en revista *Desarrollo Económico*, vol. 59, N° 228.

TOURAINÉ, A. (1973) "Producción de la sociedad", Seuil, París.